

REPUBLICA DE COLOMBIA**RAMA JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE
TIERRAS DE TUMACO**

PROVIDENCIA: Sentencia
CLASE DE PROCESO: Restitución y Formalización de Tierras
PROCESO N°: 2013-00058
SOLICITANTE: JOSE MARIA ESPINOSA PINCHAO

San Juan de Pasto, 14 de marzo dos mil catorce (2014)

Procede este despacho a emitir sentencia respecto de la presente solicitud de restitución y formalización de tierras, debidamente presentada por la UAEGRTD de Nariño en representación del señor JOSE MARIA ESPINOSA PINCHAO, para que le sean reconocidos sus derechos en el marco de la justicia transicional concebida por la política de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, establecida en la Ley 1448 de 2011.

I.- ANTECEDENTES

1.- En ejercicio de las facultades consagradas en el artículo 81 de la Ley 1448 de 2011, el señor JOSE MARIA ESPINOSA PINCHAO, por intermedio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzadamente de Nariño, presentó solicitud de restitución y formalización de tierras, para que le fueran reconocidas, legalizadas y protegidas sus relaciones jurídico materiales que sostenía con el predio denominado "SAN JOSE" identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 240-104000 al momento del desplazamiento forzado, ocurrido en el Corregimiento de Santa Bárbara, Municipio de Pasto, Departamento de Nariño.

2.- En sustento de lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzadamente de Nariño manifestó, que la dinámica del conflicto armado, surge en el corregimiento de Santa Bárbara a partir del año 1999 con la llegada de la compañía Jacinto Matallana del frente 2 de las FARC, quienes al mando de alias "El Pastuso" realizaron numerosas y distintas actividades delictivas como el cobro de vacunas e impuestos de guerra, la activación de un artefacto explosivo, asesinatos y hurtos de diferentes bienes; y cuya influencia propicio el remplazo de los sembríos tradicionales para sustituirlos por el cultivo de amapola, fin logrado mediante las convocatorias obligadas a las que eran citados los pobladores para aprender sobre esa siembra.

Además sostuvo que el día 8 de abril de 2002, el Ejército Nacional de Colombia, a través de un grupo de contraguerrilla denominado "Macheteros del Cauca", empieza a hacer aparición eficiente en el corregimiento de Santander en el Municipio de Tangua, y de la

misma forma llegaron a la vereda el Cerotal del corregimiento de Santa Bárbara del Municipio de Pasto, advirtiéndolo a los campesinos acerca de las expectativas de combate, las cuales tuvieron lugar durante los días 11 y 12 de ese mismo mes y año, originando así el desplazamiento masivo de los pobladores de dicha zona. Los mismos enfrentamientos tuvieron lugar el día 13 de abril del ese mismo año en la vereda los Alisales, donde el Ejército Nacional desmanteló el campamento del grupo guerrillero.

Como resultado de los acontecimientos descritos, muchas familias se vieron forzadas a desplazarse a otros sectores rurales, y otras hacia el casco urbano de la ciudad de Pasto, quienes se vieron temerosas de denunciar ante cualquier autoridad a causa de las represalias y amenazas emanadas de los grupos ilegales que participaron de dichos enfrentamientos.

3.- Consecuencia de lo narrado anteriormente, el señor JOSE MARIA ESPINOSA PINCHAO, identificado con cédula de ciudadanía N° 5.201.363 de Pasto, manifestó que en el año 2002, en compañía de su núcleo familiar compuesto para el momento por su cónyuge la señora ROSA ELENA CADENA DE ESPINOZA y sus hijos FRANCISCO JAVIER ESPINOSA CADENA, FREDDY MARCELINO ESPINOSA CADENA, AURA CIELO ESPINOSA CADENA, SOCORRO ESPINOSA CADENA, YOLANDA ELIZABETH ESPINOSA CADENA, MERY CARMENZA ESPINOSA CADENA, ROSA ESPINOSA CADENA, CARMEN AMELIA ESPINOSA CADENA, ROSARIO ESPINOSA CADENA, OLINDA NIEVES ESPINOSA CADENA, DIOCELINA DEL ROSARIO ESPINOSA CADENA y CELMIRA DEL SOCORRO ESPINOSA CADENA, y a causa de los enfrentamientos realizados entre los miembros de la fuerza pública nacional y la guerrilla de las FARC suscitado en esa época, se vio obligado a desplazarse forzosamente de su lugar de asiento, el cual, en esa fecha correspondió al Corregimiento de Santa Bárbara del Municipio de Pasto, hasta la vereda Los Ángeles donde permanecieron por el término de 8 días, abandonando de esta manera su inmueble denominado "San Jose" antes denominado "San Miguel" identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 240-104000 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pasto.

II.- PRETENSIONES

Con base en los hechos narrados anteriormente, el solicitante a través de este trámite pretende lo siguiente:

1. Que se protejan sus derechos fundamentales a la restitución de tierras, así como los de su cónyuge y de su respectivo núcleo familiar de conformidad con lo establecido en la sentencia T-821 de 2007.
2. Que se declare por vía de prescripción ordinaria que el señor JOSE MARIA ESPINOSA PINCHAO, es propietario de la porción de terreno equivalente a dos (2) hectáreas y cinco mil doscientos cincuenta y un metros cuadrados (5251), del predio denominado SAN JOSE identificado con matrícula inmobiliaria N° 240-104000 sin número catastral, el cual está ubicado sobre el predio de mayor extensión denominado SAN MIGUEL identificado con número catastral N° 52-001-00-01-0034-0260-00 y folio de matrícula inmobiliaria N° 240-70525, mismo que están, mismo que están situados en el corregimiento de Santa Bárbara, Municipio de Pasto, Departamento de Nariño.
3. Que se ordene el desenglobe de la porción de terreno perteneciente al señor JOSE MARIA ESPINOSA PINCHAO, correspondiente a dos (2) hectáreas y cinco mil doscientos

cincuenta y un metros cuadrados (5251), del predio denominado SAN JOSE identificado con matrícula inmobiliaria N° 240-104000 sin número catastral, de acuerdo al área georeferenciada consignada en el informe Técnico Predial y de conformidad con lo establecido por el literal (i) del artículo 91 de la ley 1448 de 2011.

4. Que se ordene a la Oficina de Instrumentos Públicos de Pasto, registre la sentencia que en estos procesos reconociere el derecho fundamental a la restitución de tierras a favor del solicitante señor JOSE MARIA ESPINOSA PINCHAO y su conyuge, y en consecuencia, se cancele todo antecedente registral , gravámenes y limitaciones de dominio, título de tenencia, arrendamiento, falsas tradiciones y medidas cautelares registradas con posterioridad al abandono, así como la cancelación de los correspondientes asientos e inscripciones registrales que figuren a favor de terceros, en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria, aplicando para ese efecto, el criterio de gratuidad señalado en el Parágrafo 1 del Artículo 84 de la Ley 1448 de 2011.

5. Que se ordene al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la apertura y/o actualización de sus registros cartográficos y alfanuméricos con observancia de la individualización e identificación del predio objeto de la presente solicitud y de conformidad con lo dispuesto en el literal “p” del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.

6. Que se ordene a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas, como al Comité Municipal de Justicia Transicional, formule el plan de retorno del desplazamiento masivo ocurrido en el año 2002 conforme a la política pública que se encarga de ello proferida en el año 2009, a efecto de que la población desplazada logre su restablecimiento a través de la generación de oportunidades y alternativas de regreso al lugar de donde se vieron forzados a salir, con observancia de los principios de voluntariedad, seguridad, dignidad y garantía de no repetición.

7. Que se ordene a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas en conjunto con el Comité municipal de Justicia Transicional, formule el plan de retorno del desplazamiento masivo ocurrido en el año 2002 en el corregimiento de Santa Bárbara del Municipio de Pasto de conformidad con la política pública de retorno proferida en el año 2009.

8. Que se ordene a la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, que incluya al solicitante junto con su núcleo familiar en el RUV, para que reciban la atención, asistencia y reparación humanitaria integral de conformidad con los beneficios establecidos en la Ley 1448 de 2011.

9. Que se ordene al Banco Agrario de Colombia, para que entregue los subsidios de vivienda de forma preferente a las personas víctimas del desplazamiento, que han sido incluidas en el registro único de tierras despojadas y abandonadas y que actúan como solicitantes, con el fin de mejorar sus condiciones de habitabilidad, así mismo, para que realice las gestiones correspondientes sobre las operaciones crediticias en las que los beneficiarios sean aquellas personas víctimas del desplazamiento del conflicto armado ocurrido en el Corregimiento de Santa Bárbara, Municipio de Pasto, Departamento de Nariño y que hayan sido incluidas en el registro único de Tierras despojadas y Abandonadas, y además para que rinda un informe semestral sobre las operaciones crediticias en las que se benefician a este tipo de población.

10. Que se ordene al Ministerio de Trabajo, al Sena y a la Unidad de Víctimas, para que ponga en marcha los programas de empleo rural y urbano referidos en el Título IV, Capítulo

I, artículo 67 del Decreto 4800 de 2011 y dirigido al beneficio de la población víctima del desplazamiento ocurrido en el Corregimiento de Santa Bárbara del Municipio de Pasto. Así mismo para que las dos primeras entidades implementen el programa de empleo y emprendimiento denominado “Plan de Empleo Rural y Urbano”, que se encuentra estipulado en el Título IV, Capítulo I del artículo 68 de la misma normatividad.

11. Que se ordene al Ministerio de Protección Social, brinde la atención Psicosocial necesaria al grupo familiar del señor JOSE MARIA ESPINOSA PINCHAO, de conformidad con la oferta institucional y las competencias contempladas en la Ley 1448 de 2011.

12. Que se ordene a la Secretaria de Educación Departamental de Nariño y Municipal de Pasto, para que de acuerdo a sus competencias, gestione los recursos suficientes para ampliar la planta física y el personal del cuerpo docente y administrativo del Centro Educativo de la Vereda el Cerotal del Corregimiento de Santa Bárbara, a fin de que sus estudiantes puedan culminar la totalidad de sus estudios secundarios. De igual manera se ordene al Ministerio de educación Nacional para que de acuerdo con lo estipulado en el documento CONPES SOCIAL N° 146 del 30 de enero de 2012 proferido por el Consejo Nacional de Política Económica, adopte las medidas necesarias e implemente una línea especial para inversión en Educación Superior Técnica, Tecnológica o profesional, a favor del Corregimiento descrito.

13. Que se ordene al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que realice un estudio sobre las necesidades de los niños, niñas y adolescentes del Corregimiento de Santa Bárbara, afectados por el conflicto armado, y en consecuencia adopte las medidas de su competencia.

14. Que se ordene a la Alcaldía Municipal de Pasto, para que con la ayuda del Departamento de Nariño, el Departamento para la Prosperidad Social y el Sena, implementen los proyectos productivos sustentables en el predio objeto de este trámite procesal.

III.- IDENTIFICACION E INDIVIDUALIZACION DE LOS INMUEBLES

SOLICITANTE		IDENTIFICACION		SOLICITUDES N°	
JOSE MARIA ESPINOSA PINCHAO		5.201.363 de Pasto		2013-00058	
CARACTERISTICAS DEL INMUEBLE					
NOMBRE	UBICACIÓN	N° MATRICULA	CEDULA CATASTRAL	AREA	
“San Jose”	Vereda Divino Niño – Corregimiento de Santa Bárbara – Municipio de Pasto.	240-104000 ORIP de Pasto	Sin Información	2,5251 Ha	
LINDEROS DEL INMUEBLE “ SAN FRANCISCO Hoy EL MIRADOR”					
NORTE		Colinda con el predio de ALONSO CADENA			
ORIENTE		Colinda con el predio de NESTOR TIMARAN			
SUR		Colinda en el predio de ULPIANO DE LA CRUZ			
OCCIDENTE		Colinda con el rio OPONGOY			

COORDENADAS									
Sistemas de coordenadas	Puntos	Coordenadas Planas		coordenadas Geográficas					
				Latitud			Longitud		
		Norte	Este	Grado	Minutos	Segundos	Grados	Minutos	Segundos
En planas Sistemas de Coordenadas de Magna Colombia Bogotá y en geográficas Magnas Sirgas.	1	604815,257	976064,077	1°1' 20,499" N			77° 17' 33,221" W		
	2	604748,895	976152,566	1°1' 18,338" N			77° 17' 30,359" W		
	3	604772,703	976180,142	1 °1' 19,114" N			77° 17' 29,467" W		
	4	604773,382	976211,113	1°1' 19,136" N			77° 17' 28,465" W		
	5	604699,634	976195,013	1°1' 16,735" N			77° 17' 28,986" W		
	6	604580,428	976177,133	1 °1' 12,854" N			77° 17' 29,564" W		
	7	604665,411	976049,036	1 °1' 15,620" N			77° 17' 33,707" W		
	8	604679,455	976047,492	1 °1' 16,077" N			77° 17' 33,757" W		
	9	604702,655	976012,098	1°1' 16,833" N			77° 17' 34,902" W		
	10	604724,795	976017,566	1°1' 17,553" N			77° 17' 34,725" W		
	11	604696,132	976185,699	1 °1' 16,621" N			77° 17' 29,287" W		
	12	604694,148	976194,190	1 °1' 16,556" N			77° 17' 29,013" W		

IV.- PRUEBAS

A.- ELEMENTOS PROBATORIOS DEL RELCLAMANTE

1.- Recorte de prensa del periódico LA HORA, que informa sobre los eventos de enfrentamientos entre el Ejército y la Guerrilla en el corregimiento de Santa Bárbara, hechos que terminaron con la captura de 2 guerrilleros en la zona.

2.- Informe del contexto del conflicto armado en el Corregimiento de Santa Bárbara del Municipio de Pasto emitido por los profesionales especializados adscritos a la UAEGRTD territorial Nariño

3.- Ampliación de la declaración rendida por parte del solicitante señor JOSE MARIA ESPINOSA PINCHAO el 10 de agosto de 2012, ante funcionarios de la UAEGRTD Territorial Nariño.

4.- Declaraciones rendidas por parte de los señores RAUL GUERRERO ACHICANOY y VICTOR ANDRES LOPEZ TUPE el día 3 de septiembre de 2012, ante funcionarios de la UAEGRTD Territorial Nariño.

5.- Impresión de consulta de antecedentes judiciales del señor JOSE MARIA ESPINOSA PINCHAO, donde se certifica que el solicitante no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales.

6.- Copia de la partida de matrimonio católico entre el solicitante y la señora ROSA ELENA CADENA, expedida por el Ministerio Parroquial Nuestra Señora de Guadalupe del Corregimiento de Catambuco del Municipio de Pasto.

7.- Copia de la Cartografía Social y Grupo Focal del Municipio de Tangua, elaborado por la UAEGRTD del m25 y 31 de enero de 2013.

En lo que corresponde al predio objeto de reclamación se aportaron los siguientes:

ELEMENTOS PROBATORIOS DEL PREDIO DENOMINADO "SAN JOSE"

A.- Copia del Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 240- 70525 correspondiente al predio de mayor extensión denominado "San Miguel" y del folio de Matrícula Inmobiliaria N° 240-104000 que hace referencia al predio que se está reclamando, expedidos por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pasto.

B.- Copia de la Escritura Pública de compraventa N° 2402 del 15 de noviembre de 1991, otorgada por la Notaria Tercera del Círculo de Pasto con sus respectivos anexos.

C.- Copia de la Escritura Publica N° 352 del 8 de febrero de 1994, otorgada por la Notaria Tercera del Círculo de Pasto.

D.- Informe técnico predial elaborado por la UAEGRTD Territorial Nariño con fecha 07 de noviembre de 2012.

E.- Acopio de información proveniente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC): ficha predial y certificado plano predial, del inmueble denominado "San Miguel".

F.- Certificado predial del predio denominado "San Miguel", que da cuenta que el avalúo asciende a la suma de tres millones ciento noventa y nueve mil pesos (\$ 3.199.000).

COMO ANEXOS SE AGREGARON

A.- Constancia de inscripción del predio objeto de la presente reclamación, en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, en cumplimiento del literal b) del artículo 84 de la Ley 1448 de 2011.

B.- Solicitud de representación judicial realizada por el titular de la acción ante UAEGRTD Territorial Nariño.

C.- Constancia secretarial del 19 de julio de 2012 de la consulta realizada a la base de datos del Registro Único de Predios y Territorios Abandonados "RUPTA".

D.- Resolución por medio de la cual se asigna al profesional especializado, para la presentación de la solicitud de Restitución y Formalización de Tierras Abandonadas y Despojadas.

E.- Copia del Acta de Posesión No. 082 del 5 de abril 2013 del abogado CARLOS DAVID MOSQUERA ARTURO.

F.- Copia de la cedula de ciudadanía del solicitante, su cónyuge y su respectivo núcleo familiar.

V.- ACTUACION EN LA ETAPA ADMINISTRATIVA

En estricto cumplimiento del requisito de procedibilidad exigido por el Inciso 5° del Artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, la UAEGRTD de Nariño inició la etapa administrativa de la presente solicitud para investigar, analizar y evaluar cada uno de los hechos que el solicitante expuso en su reclamación, y en consecuencia mediante la resolución correspondiente, se dispuso incluirlo en el registro de tierras despojadas y abandonadas

forzadamente junto con su núcleo familiar y el predio descrito en el anterior acápite. Como fruto de las labores desplegadas durante ésta fase del proceso de restitución de tierras, la UAEGRTD de Nariño logró recopilar las pruebas que consideró como necesarias para acreditar la condición de víctima del solicitante, la relación jurídica ostentada con el predio reclamado y el marco cronológico en el que ocurrieron los hechos constitutivo de su desplazamiento, de acuerdo a su declaración y la de los mismos testigos, dentro del marco del conflicto armado en Colombia, en sujeción del artículo 3 de la 1448 de 2011.

Considerando lo anterior suficiente para cerrar la etapa administrativa y habiendo superado la referida exigencia de procedibilidad para el ejercicio de la acción de restitución y formalización de tierras, la UAEGRTD de Nariño procedió a presentar la respectiva solicitud en representación de la víctima que se describió en líneas antecesoras, a fin de que en etapa judicial y mediante sentencia, le fueran reconocidos sus derechos que en materia de la política de restitución de tierras les pudieran corresponder.

VI.- ACTUACION EN LA ETAPA JUDICIAL

Allegada la solicitud, por la UAEGRTD de Nariño, éste despacho dispuso admitirla mediante proveído calendado a 07 de junio de 2013, con observancia de las premisas normativas contenidas en el artículo 86 de la Ley 1448 de 2011, de manera que se ordenaron realizar las respectivas comunicaciones, notificaciones y publicaciones a que había lugar, y demás inscripciones que permitieran darle publicidad a la iniciación del respectivo asunto de restitución, para que posteriormente la UAEGRTD de Nariño, en observancia de lo ordenado en el auto admisorio proferido y en cumplimiento de las cargas procesales que orbitan en torno a ella, allego mediante escrito del 3 de julio de hogañ, la constancia de publicación del edicto, la cual es indispensable para el impulso y desarrollo normal del cauce procesal.

Cumplidas las cargas adjetivas, y habiéndose superado el término del traslado otorgado a las partes involucradas en la relación jurídico – procesal del actual debate, mediante auto de 22 de julio de 2013 se procedió a dar inicio a la etapa probatoria de conformidad con lo prescrito en la formula normativa del Artículo 90 de la Ley 1448 de 2011, en donde se acogió como pruebas las documentales aportadas en la solicitud y se decretaron las de oficio para llegar a un mejor convencimiento del contenido sustancial del objeto litigioso, como fue el caso de la inspección judicial requerida para verificar las reales características físicas del predio reclamado, y la recepción de los testimonios de los colindantes con el ánimo de esclarecer los hechos y situaciones propias de la demanda de restitución de tierras.

Luego de las anteriores actuaciones procesales, el presente asunto paso al despacho para ser fallado en sentencia, y estando en ese estado, emergió la necesidad de requerir oficiosamente a la UAEGRTD de Nariño para efectos de solventar la impresión en la ubicación espacial del predio solicitado en restitución, cimentada en las distintas formas de situarlo físicamente, las que fueron manifestadas por parte del solicitante en sus declaraciones y en la documental allegada, y por aquella entidad en su informe técnico predial, cumpliéndose dicho propósito mediante el suministro de las explicaciones pertinentes que se consignaron en escrito del 25 de febrero de 2014, con las cuales se superaron todas la situaciones que impedían el proferimiento del fallo definitivo que resolviera sustancialmente el principal objeto litigioso del presente asunto.

Ahora, para efectos de resolver lo correspondiente, se expondrá de manera preliminar el marco normativo general sobre el cual se trasegara el caso, en segundo lugar el marco normativo especial a fin de proveer sobre lo atinente a la pretensión de formalización, en el tercero, se hará alusión al marco jurídico aplicable a la función social y ecológica de la propiedad, en cuarto lugar se dispondrá del análisis que dio lugar al desplazamiento en la zona, y en el quinto, se establecerá la acreditación de la condición de víctima en el peticionario y se hará el análisis de la relación jurídica que se llegare a acreditar por el solicitante frente al predio reclamado, de acuerdo con la prueba aportada, y por último, siempre que se accediere a la pretensión principal, se analizará lo correspondiente a las medidas consecuenciales de la vocación transformadora que puedan tener cabida dentro del marco de la política pública de restitución de tierras.

VII.- CONSIDERACIONES

A.- MARCO NORMATIVO

1.- COMPETENCIA

Este Juzgado se torna competente para resolver las elevadas pretensiones, como quiera que los bienes se encuentran ubicados en el corregimiento de Santa Bárbara perteneciente al Municipio de Pasto del Departamento de Nariño, lugar donde se le ha asignado jurisdicción para efecto de resolver los casos circunscritos al campo de la justicia transicional de restitución de tierras, tal como se dispuso en el acuerdo de creación PSAA12-9426 de 2012 modificado por el PSAA12-9685, en el cual se estableció que el ejercicio de la misma comprende los Municipios que integran los circuitos judiciales de Barbacoas, Ipiales, La Cruz, La Unión, Pasto, Samaniego, Tumaco y Túquerres. Por otro lado de igual manera son casos que se decidirán en única instancia en tanto que el estudio que se acomete a los mismos no tienen reconocidos opositores en su trámite.

2.- LA JUSTICIA TRANSICIONAL COMO COMPONENTE PRIMORDIAL PARA LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS

La necesidad del pueblo colombiano en la búsqueda de soluciones definitivas al conflicto armado interno, permitió que al interior del congreso se empezara a morigerar un discurso en torno a la solución del mismo a través de un sistema de justicia transicional que permitiese la aplicación de una normatividad excepcional dentro de un espacio de tiempo determinado, llena de la suficiente potencialidad para transitar en el camino hacia la paz. Es así como mediante la instauración de mecanismos con esa característica se ha buscado enfrentar una problemática que data de muchos años y que pone de manifiesto una violación sistemática a los derechos humanos.

El término transicional implica casi siempre, que toda una sociedad es consciente de enfrentar un pasado de violaciones a los derechos humanos surgidas de un conflicto superado, para efectuar un tránsito institucional de la guerra a la paz que resulta necesario para generar líneas que dirijan hacia un nuevo contexto lleno de justicia social, valga decir, de aquel que permita prescindir de las circunstancias originarias que dieron lugar al desconocimiento masivo y ostensible de las garantías constitucionales de una determinada sociedad, lo cual exige la extinción del contexto violento como requisito indispensable para la satisfacción de dicha finalidad.

Por lo anterior, en el caso de Colombia preocupa el hecho consistente en que aún no se haya dado cumplimiento a esa *sine qua non* condición, en tanto que el conflicto armado interno mantiene vigencia hasta el momento, lo cual impide la facilidad en el arribamiento de las soluciones planteadas como metas por este tipo de justicia transicional, puestos que los mecanismos para obtener la verdad, la justicia y reparación se complejizan y se tornan de más difícil acceso; de ahí que los medios ordinarios para solventar la deficiencia estatal hubieren quedado en el campo de la insuficiencia, y por ello, la nacida urgencia en la creación de nuevos instrumentos jurídicos con alta capacidad para atender los fines trazados por el Estado y lograr así la tan anhelada paz.

Por eso, LUIS JORGE GARAY SALAMANCA y FERNANDO VARGAS VALENCIA bien se han encargado de exponerlo en su obra al decir: “Vistos los retos de la restitución de tierras en Colombia, resulta indispensable profundizar sobre las implicaciones de un sistema de justicia transicional, especialmente diseñado para las víctimas, el cual funcionaría en medio de la vigencia de los conflictos que han dado lugar a la existencia de hechos victimizantes. Se parte del supuesto según el cual, a pesar de los riesgos que suscita la insistencia en impulsar un marco de justicia transicional en un contexto en el que no ha habido lugar para la transición (entendida como el cese de las violencias que configuran las causas objetivas de la victimización), es necesario que en Colombia exista un marco de justicia transicional exclusivamente diseñado para la realización y goce efectivo de los derechos de las víctimas. Igualmente, supone que el escenario más idóneo para lograr la implementación de un sistema de justicia transicional pro víctima es el marco de actuación institucional configurado por la ley 1448 de 2011 para la restitución de tierras despojadas o forzadas a dejar en abandono con ocasión del desplazamiento forzado”.¹

De la misma forma es de vital importancia recordar, que si bien todos los procesos transicionales buscan similares objetivos, lo cierto es que éstos dependen en gran medida de las particularidades enmarcadas dentro de un entorno político y jurídico preciso, pues su éxito emana de las características culturales, históricas y las motivaciones de los actores de las sociedades en las que se desarrollen, y desde donde surge la variedad de instrumentos utilizados para surtir el desarrollo transicional requerido, en todo caso sin obviarse la buena ponderación entre los valores de la paz y la justicia. Ese abordaje a éste tipo de justicia, tiene características puntuales, en tanto que los arreglos, judiciales o no, que se dan a sí mismas las sociedades en transición a la democracia, se establecen para garantizar la moralidad de su vuelta o su avance a la normalidad.² El cumplimiento del criterio de moralidad se materializa en la garantía, frente a las violaciones graves a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, de la protección de los derechos fundamentales y de los principios básicos del sistema transicional como son la justicia, la verdad y la reparación.

Corolario de lo anterior se tiene que la justicia transicional tiene diferentes objetivos como son: i) abordar e intentar sanar las heridas que surgen en la sociedad como resultado de las violaciones a los derechos humanos, ii) avanzar en los procesos de reconciliación, iii) garantizar los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad, justicia y reparación integral, iv) revelar una justificación ideológica de la violencia y los crímenes de guerra y ofrecer a la sociedad la posibilidad de desmontar el sistema de valores asociados a ella, v) promover la eliminación de las causas de una situación de injusticia social de carácter estructural, que a su vez deriven en sólidas garantías de no repetición de las violaciones con lo cual se garantice una paz perdurable.³

¹ Memoria y reparación: elementos para una justicia transicional pro víctima. Universidad Externado de Colombia.

² VALENCIA VILLA, H. Diccionario de Derechos Humanos.

³ ELSTER, J. (2006), Rendición de cuentas. La justicia transicional en perspectiva histórica. Katz. Buenos Aires.

Conforme a los anteriores postulados es que la justicia transicional para la restitución de tierras destaca en su procedimiento administrativo y judicial reglas novedosas al régimen probatorio como es i) inversión de la carga de la prueba, ii) presunciones de despojo iii) flexibilización en la valoración del acervo probatorio iv) flexibilización en el aporte de pruebas y términos cortos a efecto de resolver los casos; lo cual redundará en favor de las víctimas la posibilidad de hacer efectivos sus derechos, mismos que para efecto de poder ser realizados requerirán de una concatenación de rutas institucionales que lo hagan posible.

3.- ACOPLAMIENTO DE DIRECTRICES INTERNACIONALES AL MARCO DE LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS

En principio, se debe partir del denominado bloque de constitucionalidad para ajustar el ordenamiento internacional a nuestro ordenamiento interno, el cual ha sido definido por nuestro más alto Tribunal en la materia “como aquella unidad jurídica compuesta por normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional⁴”

De la misma forma la ley 1448 de 2011, se ha encargado de disponer en su normativa la prevalencia de los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, sobre derecho internacional humanitario y derechos humanos por formar parte del bloque de constitucionalidad, así como que la interpretación de las normas que regulan la materia se haga basada en el principio pro homine, atendiendo la vigencia de los derechos humanos de las víctimas⁵. Sustentado en lo anterior se tiene que nuestro más alto Tribunal Constitucional, ha sido el principal aportante a la discusión sobre el tema del desplazamiento forzado, y en su discurso ha establecido la titularidad de los derechos a la realización de la justicia, a ser beneficiarios de medidas de verdad y memoria y a obtener reparación del daño causado residido en cabeza de las personas que han sido objeto de violaciones graves, frente a los cuales se adiciona la restitución, indemnización y rehabilitación del daño, así como las garantías de no repetición⁶

A su vez la Corte Interamericana de derechos humanos ha dicho que los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y reparación “se rige, como ha sido aceptado universalmente, por el derecho internacional en todos sus aspectos, alcance, naturaleza, modalidades y la determinación de los beneficiarios, nada de lo cual pueda ser modificado por el Estado, invocando para ello disposiciones de su derecho interno⁷”

Bajo ésta perspectiva la Corte Constitucional ha referido que “el Estado Colombiano tiene la obligación de respetar y garantizar las normas de protección y de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales interpretados a la luz de las garantías consignadas en los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos aprobados por Colombia bajo estricta aplicación del principio pro homine” de forma que “tal obligación proyecta sus efectos más allá de la relación entre los agentes estatales y las personas sometidas a su jurisdicción,

⁴ CORTE CONSTITUCIONAL. C 225 de 1995

⁵ Ley 1448 Artículo 27.

⁶ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T 821 de 2007.

⁷ CORTE IDH, CITADA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA T821 de 2007

por cuanto se traduce en el deber positivo en cabeza de las autoridades estatales de adoptar las medidas imprescindibles para asegurar la protección efectiva de los derechos en las relaciones entre las personas”⁸

Con apoyo en la anterior óptica, la CIDH ha manifestado que los países desconocen dichos lineamientos cuando satisfacen únicamente la obligación pecuniaria, incurriendo de ésta manera en normas y prácticas infractoras de la convención, en la medida en que el imperativo de la indemnización va mucho más allá del resarcimiento monetario al comprender medidas correctivas que exigen la implementación de la oferta institucional para descartar cualesquiera factor que nuevamente amenace con la repetición de los hechos que dieron lugar a la masiva vulneración de los derechos humanos, tal como ha sido reafirmado por la Corte Constitucional al decir “(...) las medidas de protección de los derechos dictadas por la Corte Interamericana adquieren una dimensión objetiva: tienen, de un lado, un matiz esclarecedor de la verdad así como enaltecedor de las víctimas y, de otro, un tinte preventivo, esto es, enderezado a que los Estados adopten las medidas indispensables para garantizar que las prácticas desconocedoras de los derechos no se volverán a repetir”⁹

Bajo éste postulado se tiene que las sentencias en favor de las víctimas de desplazamiento se encuentran evocando de forma permanente, principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas (Principios Pinheiro), el protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, la declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de San José sobre refugiados y personas desplazadas, todos ellos incorporados a nuestro ordenamiento jurídico por efecto del bloque de constitucionalidad.

Corolario de ello se obtiene entonces que el marco de comprensión del proceso de justicia transicional en el componente de restitución de tierras, tiene como principal punto de acople la ley interna, las decisiones internacionales sobre la materia y los diferentes tratados que forman parte integrante de nuestra constitución, pues de lo que se trata es de que las medidas que se adopten en el desarrollo del mismo, busquen superar obstáculos históricos que han impedido satisfacer derechos de las víctimas y que dichas decisiones puedan estar claramente sustentadas conforme al ordenamiento internacional.

4.- LA ACCIÓN DE RESTITUCIÓN

Para efecto del desarrollo de la política de restitución de tierras establecida en la ley 1448 de 2011 se estableció como principios fundantes los siguientes:

1. Preferente. La restitución de tierras, acompañada de acciones de apoyo pos restitución, constituye la medida preferente de reparación integral para las víctimas;
2. Independencia. El derecho a la restitución de las tierras es un derecho en sí mismo y es independiente de que se haga o no el efectivo el retorno de las víctimas a quienes les asista ese derecho;

⁸ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C 1199 de 2008.

⁹ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T 576 de 2008.

3. Progresividad. Se entenderá que las medidas de restitución contempladas en la presente ley tienen como objetivo el de propender de manera progresiva por el restablecimiento del proyecto de vida de las víctimas;
4. Estabilización. Las víctimas del desplazamiento forzado y del abandono forzado, tienen derecho a un retorno o reubicación voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad;
5. Seguridad jurídica. Las medidas de restitución propenderán por garantizar la seguridad jurídica de la restitución y el esclarecimiento de la situación de los predios objeto de restitución. Para el efecto, se propenderá por la titulación de la propiedad como medida de restitución, considerando la relación jurídica que tenían las víctimas con los predios objeto de restitución o compensación;
6. Prevención. Las medidas de restitución se producirán en un marco de prevención del desplazamiento forzado, de protección a la vida e integridad de los reclamantes y de protección jurídica y física de las propiedades y posesiones de las personas desplazadas;
7. Participación. La planificación y gestión del retorno o reubicación y de la reintegración a la comunidad contará con la plena participación de las víctimas;
8. Prevalencia constitucional. Corresponde a las autoridades judiciales de que trata la presente ley, el deber de garantizar la prevalencia de los derechos de las víctimas del despojo y el abandono forzado, que tengan un vínculo especial constitucionalmente protegido, con los bienes de los cuales fueron despojados. En virtud de lo anterior, restituirán prioritariamente a las víctimas más vulnerables, y a aquellas que tengan un vínculo con la tierra que sea objeto de protección especial.

Como acción demarcada dentro de los referidos principios, la restitución comprende la recuperación jurídica y material de los derechos de las víctimas, individual o colectivamente consideradas, sobre sus tierras de las que fueron despojadas u obligadas a abandonarlas, de manera que dicha acción se ha instituido como mecanismo reparador para restablecer en favor de ellas todas las condiciones que ostentaban al momento de la ocurrencia del despojo, sin perjuicio de la adopción y reconocimiento adicional de nuevas medidas que resulten necesarias para la superación de los factores que permitieron el acaecimiento de los hechos victimizantes sobre dichas personas.

Así mismo como mecanismo idóneo creado por el legislador para efecto de procurarles a las víctimas el retorno a los lugares de los cuales fueron desplazados, bien sea por abandono o despojo en razón del conflicto armado interno, tienen como escenario de ejecución dos etapas, la primera que es de carácter administrativo, y por ende, llevada a cabo por parte de la UAEGRTD para realizar la labor investigativa que exige el esclarecimiento del contexto en el que fueron perpetrados los actos violentos, como de las relaciones de los derechos constitucionales y legales injustificadamente desconocidos, y la segunda, de naturaleza judicial, donde se constata la viabilidad de su admisión y se ordena las notificaciones a los actores pasivos de la acción y el emplazamiento de que trata la ley, para que una vez trabada la relación jurídico procesal y finalizado el término para la oposición se decrete las pruebas que se considere pertinentes, atendiendo los principios que las gobiernan, para que posteriormente y una vez finalizada la evacuación de las mismas se adopte la decisión, bien por parte del Juez cuando no exista oposición o del Tribunal Especializado correspondiente cuando la hubiere.

Por otro lado es del caso afirmar, que para el Juez la decisión que adopte en orden a la solicitud de restitución de tierras, puede tener varios matices, pues no es sólo la formalización, sino a la vez la protección, la posible compensación cuando a ello hubiere lugar en favor del opositor de buena fe exenta de culpa, posibles contratos para el uso del predio restituído, así como el goce efectivo de los derechos del reclamante, o la asignación de otro lugar para que ello se materialice, además de medidas de corte extraordinario que lo garanticen en condiciones de dignidad con vocación transformadora.

5.- TITULARES DEL DERECHO A LA RESTITUCIÓN

De acuerdo a la ley se tornan titulares de la acción de restitución: “Las personas que fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el artículo 3o de la presente Ley, entre el 1o de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley, pueden solicitar la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzosamente, en los términos establecidos en este capítulo.¹⁰

Bajo el anterior entendido se tiene que son aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

De igual forma, la facultad de ejercer la acción de restitución se extiende a las personas que por mantener relaciones próximas con la víctima directa de los hechos de despojo o abandono están legitimadas en los términos del Artículo 81 de la ley 1448, las cuales se resumen en las siguientes:

“Su cónyuge o compañero o compañera permanente con quien se conviva al momento en que ocurrieron los hechos o amenazas que llevaron al despojo o al abandono forzado, según el caso.

Cuando el despojado, o su cónyuge o compañero o compañera permanente hubieran fallecido, o estuvieren desaparecidos podrán iniciar la acción los llamados a sucederlos, de conformidad con el Código Civil, y en relación con el cónyuge o el compañero o compañera permanente se tendrá en cuenta la convivencia marital o de hecho al momento en que ocurrieron los hechos.

En los casos contemplados en el numeral anterior, cuando los llamados a sucederlos sean menores de edad o personas incapaces, o estos vivieran con el despojado y dependieran económicamente de este, al momento de la victimización, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas actuará en su nombre y a su favor.”

Los titulares de la acción podrán solicitar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas que ejerza la acción en su nombre y a su favor.

6.- ENFOQUE DIFERENCIAL APLICADO A LA POLÍTICA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

¹⁰ LEY 1448 Artículo 75

La situación de crímenes atroces, de lesa humanidad y de desplazamiento forzado o abandono de tierras que se ha evidenciado a lo largo de la historia de Colombia, presenta un común denominador que no es otro diferente a aquel que se circunscribe a la existencia de un factor discriminatorio, asociado al género, la edad, o la pertenencia a un grupo minoritario¹¹, por tal razón, debe ser un aspecto de relevante consideración en la etapa administrativa, y posteriormente en la judicial, pues merecen un especial tratamiento al obedecer a patrones que aun estructuran lo cimientos sociales de la nación, y que además han fomentado su exclusión de las personas desadheridas al esquema tradicional de composición ciudadana que caracteriza a la mayoría de colombianos, marginalizando su marco de atención integral de necesidades definidas, de ahí que este enfoque debe inmiscuirse en el cúmulo de decisiones a adoptar dentro de éste marco de justicia transicional.

El hecho de procurar la mejor atención a las víctimas que se enmarquen dentro una situación especial y diferenciada del resto social, busca materializar la mayor atención a la población desplazada que actualmente se sujeta a un estado de mayor vulnerabilidad, para efectos de dignificarlas en el reconocimiento de sus derechos, superando de esa manera, el estado de cosas inconstitucional advertido en la sentencia T 025 de 2004.

El anterior enfoque se encuentran inmerso en la Ley 1448 de 2011, y por lo tanto, obliga no solamente en la atención a la víctima, sino que además, en lo que concierne a la intervención oficial para asegurar que éste grupo de personas medien de manera directa en la sustanciación de los casos, en el litigio de los mismos, en las decisiones judiciales y en la etapa posterior a ellas. Es así como en desarrollo de ésta política de justicia transicional se expidió el Decreto 4829 de 2011 para incluir los componentes viabilizadores de la real ejecución del principio de discriminación positiva dentro del marco de la actuación administrativa del proceso de restitución de tierras, mismo que debe ser observado en la fase judicial como en las posteriores actuaciones de garantía del goce estable de los derechos reconocidos en la conclusión del trámite integral (Fase administrativa y judicial), en todo caso, procurados desde una óptica adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva.

7.- ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL MARCO DE LA LEY DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Desde el marco del régimen probatorio de la ley 1448 de 2011 se desarrollan situaciones excepcionales que deben atenderse a la luz de la carga invertida de la prueba, de la especial y atípica valoración del material que se entregue por parte de la unidad administrativa de restitución de tierras, de los medios de prueba y todos los instrumentos que puedan llegar a ser útiles para el esclarecimiento de las circunstancias que rodean los bienes, las relaciones jurídicas que puedan tener las personas sobre determinados predios y las formas como estos denotan su adquisición, que bien puede ser regular o irregular.

De manera que gozaran de valor probatorio todo aquel material informal que dé cuenta de la celebración precaria de los actos jurídicos efectuados bajo el entendimiento comunitario de las reglas que los rigen, valga decir, que el método objetivo de la sana crítica desbordará el juicio racional al que normalmente acudiría la autoridad judicial para determinar los presupuestos facticos que sustentan la aplicación de la disposición legal en sus respectivas providencias. Además, y desde ese excepcional y particular análisis del despliegue probatorio, se deberá visualizar la cadena de despojos que se pudieron dar sobre un bien, la falsificación de documentación o la destrucción de material relacionado con el predio,

¹¹ Afrodescendientes, comunidades indígenas, población Rom o Gitanos

situaciones que por demás, no sólo son reiterativas en éste tipo de procesos, sino que adicionalmente permitirán una aproximación real del estado actual de la propiedad en Colombia, ya que estos componen los verdaderos contextos facticos desde donde surge las realidades jurídicas que rodean a la mayoría de los bienes ubicados en el universo rural.

Es del caso señalar que las unidades administrativas de restitución de tierras en gran medida se encargan de recolectar un cúmulo de información destinada con fines probatorios, para determinar la posible verdad de los hechos del despojo y abandono forzado dentro del marco del conflicto armado, la cuales en todo momento deberán evaluarse de conformidad con los postulados de la buena fe, la favorabilidad y la carga de la prueba, sin vulnerar el margen limitativo de la valoración discrecional que configura el debido proceso y la contradicción que pueda surgir sobre dicho recaudo de pruebas, no obstante que esta última garantía pueda verse sometida a un reconocimiento relativo en virtud de las presunciones legales y de derecho que operan de pleno derecho frente al avizoramiento de unos supuestos específicos.

Por ello, de gran importancia resultan las presunciones legales y de derecho, que se encuentran señaladas en el artículo 77 de la ley 1448 de 2011, el cual no hace más que construir un listado riguroso que entraña diferentes situaciones de orden factico que operan en favor del actor y que, de entrada al proceso, le generan una expectativa de consolidación real sobre el derecho pretendido a su favor, y por esa precisa razón, deben ser perfectamente documentadas por parte de quien dirija el proceso de restitución, ya fuere la unidad administrativa para la restitución de tierras o la persona reclamante, pues en algunos casos, con base en ellas y sólo en ellas, puede estar depositada gran parte la fortaleza de la decisión.

No obstante la anterior descripción del proceso no limita al Juez, ni obliga a que adopte la decisión final con base solamente a lo aportado por la UAEGRTD, pues el que tenga un procedimiento MIXTO, no implica que el operador jurídico actúe como en cumplimiento de una función notarial o simplemente registral, pues en caso de verse necesario deberá bogar por la obtención de pruebas adicionales que le permitan llegar al convencimiento de que el predio inscrito corresponde al predio despojado o abandonado, o que los hechos que dieron lugar al mismo se enmarcan dentro del contenido aplicable de la ley, así como la realidad de los derechos de quienes figuran como reclamantes es fiel a esa recolección inicial de pruebas por parte del ente administrativo, de ahí que como lo hubiera expuesto nuestro más alto Tribunal en lo Constitucional en la sentencia C 099 de 2013 con ponencia de la Honorable Magistrada María Victoria Calle, el Juez en materia de Restitución de Tierras no es un convidado de piedra y por tanto la posibilidad de decretar pruebas no se ha visto vedada por efecto de la fidedignidad con la que deben ser valoradas las provenientes de la UAEGRTD.

8.- LA RESTITUCIÓN CON VOCACIÓN TRANSFORMADORA

La restitución de tierras dentro del marco de la ley 1448, es una forma de reparación en favor de las víctimas, pero que por sí sola no es capaz de remediar el mal endémico que padece esta población como es la existencia permanente sobre su territorio del conflicto armado, de ahí que como un componente adicional a la recuperación de los predios, se hubiera añadido un concepto evolucionado del derecho internacional como es la vocación transformadora.

La vocación transformadora significa, que para poder lograr ese a veces frustrado anhelo de paz se busque un proceso de transición, que empiece a reconstruir el tejido social que

se vio afectado producto del conflicto armado, buscando como primer elemento para el logro de dicho objetivo la reparación integral de los daños causados a las víctimas como bien se encarga de denunciarlo la ley “Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, **transformadora** y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y **garantías de no repetición**, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante”¹² (El subrayado es nuestro).

Aunado a lo anterior se tiene que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado que “las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo sino también correctivo. En este sentido, no es admisible una restitución a la misma situación estructural de violencia y discriminación.”¹³ Siendo así es claro que deben acompañar a la restitución de tierras medidas de tipo complementario que busquen excluir las condiciones en que vivían los reclamantes y que permitieron o facilitaron su victimización.

Por ello, la restitución de debe ser interpretada más allá de su restringida significación para abarcar una acepción más amplia en donde se incluyan postulados fundamentales de altos raigambres constitucionales que permitan la materialización de la garantía de no repetición y la superación del estado de cosas inconstitucionales que en su momento fue reprochado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T – 025 de 2004, es decir, que el derecho de restitución debe ser reconocido de tal manera que involucre la adopción de medidas complementarias al propósito vocacional de transformación, necesario para la implementación de una justicia distributiva y social en la zona rural de la nación.

Partiendo de lo anterior, puede hacerse una aproximación conceptual de lo que debe entenderse como vocación transformadora de la acción de restitución de tierras, partiendo de la base de concebirla como aquella oportunidad indispensable para desplegar la amalgama de acciones públicas que permitan atender a la población vulnerada en la superación de sus condiciones de precariedad, y para ese efecto, se deberá seguir la implementación de una política pública en favor de dicha comunidad que procure la seguridad en la zona, el desarrollo rural sostenible, la estabilización social y económica, pues sólo así se garantiza la no repetición de las mismas condiciones, que permitieron la victimización de quienes hoy son reclamantes.

Es entonces un deber del Estado atender de manera preferente a la población desplazada, pues de alguna manera la inhabilidad para hacerlo de forma pasada a efecto de preservar las condiciones de orden público en el lugar que residían y evitar su desplazamiento, lo obliga a asumir el garantizarle a los cientos de miles de colombianos que han tenido que abandonar sus hogares y afrontar condiciones extremas de existencia la atención necesaria para reconstruir sus vidas.

¹² Ley 1448 artículo 25

¹³La Corte recuerda que el concepto de “reparación integral” (restitutio in integrum) implica el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una indemnización como compensación por los daños causados. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación de discriminación estructural en la que se enmarcan los hechos ocurridos en el presente caso y que fue reconocida por el Estado (supra párrs. 129 y 152), las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo sino también correctivo. En este sentido, no es admisible una restitución a la misma situación estructural de violencia y discriminación. Del mismo modo, la Corte recuerda que la naturaleza y monto de la reparación ordenada dependen del daño

La Corte Constitucional al referirse al tema se ha tornado reiterativa en afirmar, que los esfuerzos estatales frente a la crisis humanitaria generada por el desplazamiento deben corresponder a la gravedad de la situación, lo cual significa que no solo han de concretarse en las medidas necesarias para conjurar el sufrimiento y los perjuicios derivados de abandonar el domicilio, el trabajo, el hogar, la familia, los amigos, etc., sino que también deben ‘ser eficientes y eficaces, proporcionales a los daños pasados, presentes y futuros que soportan las familias obligadas a abandonar su terruño, sin que, de manera alguna, puedan desconocer o agravar su situación.

Así mismo ha indicado que la atención a los desplazados ha de ser **integral**, ‘esto es, debe consistir en un **conjunto de actos de política pública** mediante los cuales se repare moral y materialmente a las personas en situación de desplazamiento, pues no puede soslayarse que el objetivo final de los esfuerzos estatales en este ámbito es hacer efectivo, entre otros, el **derecho a la reparación** de esas personas como **víctimas** que son de **violaciones** a una gama amplia de **derechos humanos**, lo cual se obtiene mediante el **restablecimiento**, entendido como ‘**el mejoramiento de la calidad de vida de la población desplazada**’ y ‘**el acceso efectivo de los desplazados a bienes y servicios básicos, así como la garantía de sus derechos y libertades fundamentales**’. (El subrayado es nuestro)

El norte jurídico en esta materia está representado por los **Principios Rectores de los Desplazamientos Internos**, formulados en 1998 por el representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el desplazamiento interno, Francis Deng, a solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas y su Comisión de Derechos Humanos.

9.- FALLO Y SEGUIMIENTO A LA DECISIÓN EN EL MARCO DE LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Se ha dicho que el fallo que se emita en el marco de la ley de restitución de tierras debe procurar la integralidad en términos de definición jurídica, pero igualmente a él no le pueden ser ajenos aspectos tan relevantes como el grado de vulnerabilidad de las víctimas, dado que el objeto de la acción no es solamente la restitución de las tierras, sino que también busca garantizar el goce efectivo de esos derechos de la persona sobre el bien, de ahí que se deba identificar claramente qué tipo de medidas cumplen ese cometido de reparar a las víctimas y garantizar su derecho reclamado en condiciones de seguridad y dignidad¹⁴.

En ese entendido la conclusión a la que se arribe por el estamento judicial, debe decidir sobre la propiedad, posesión del bien u ocupación, además de clarificar las relaciones jurídicas de los solicitantes con el predio y sus opositores, pero sin que en ningún caso se obvие las medidas complementarias y el seguimiento que sobre las mismas debe hacer, dentro del marco amplio que le ha delegado la ley 1448 de 2011¹⁵.

Coetáneo con lo expuesto es que el funcionario judicial, debe procurar coordinar el que las decisiones que se emitan, encuentren apoyo en los programas gubernamentales dirigidos a la protección de las víctimas desplazadas por el conflicto armado interno, que no solamente reparen al actor, sino que además impida la repetición de los hechos que dieron lugar al desplazamiento, de ahí que justamente el control posterior al fallo constituya un factor relevante, en tanto que las ordenes deben establecer con suma claridad al responsable de la implementación y los posibles plazos a ejecutarse.

¹⁴ Principios Pinheiro Artículo 10

¹⁵ Ley 1448 artículo 91

B.- NATURALEZA DE LA PRETENSIÓN DE FORMALIZACIÓN

De acuerdo a la solicitud que fuera puesta a nuestro conocimiento se tiene que la UAEGRTD, manifiesta que a través de la recolección probatoria pudo determinar que en favor del suplicante se reúnen las condiciones para acceder a la propiedad del bien que reclama, bajo el modo de la prescripción extraordinaria del dominio, como quiera que ostentó la condición de poseedor durante el tiempo exigido y en cumplimiento de los demás requisitos impuestos en la legislación.

De conformidad con el contenido del artículo 2512 del Código Civil, *“La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haber poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.*

Se extrae de lo anterior que la prescripción puede ser vista desde dos perspectivas, una positiva y la otra negativa, según el resultado adquisitivo o extintivo que en ella se busca. Desde la primera de ellas, se encuentra concebida como un modo de adquirir el dominio de las cosas siempre que satisfaga la observancia de los requisitos de ley, y desde la segunda, se es concebida como una especie de sanción cuyo efecto se circunscribe a la eliminación de los derechos que dejaron de ejercerse durante un tiempo determinado por parte del respectivo titular. En su esquema positivo, la prescripción es adquisitiva del dominio, o usucapición, como también puede denominarse de manera sencilla, que requiere para configurarse de una situación fáctica previamente consolidada que acredite el sometimiento de una cosa con el ánimo de señor y dueño.

Esa tenencia material con el *animus domini*, es lo que nuestro ordenamiento jurídico ha configurado como posesión de las cosas, la cual debe preceder, según se dijo, a la pretensión de solicitar la cosa en propiedad a través del modo de la usucapición. La Corte Constitucional, ha definido la posesión como un derecho fundamental, concebida según doctrina nacional como *“la subordinación de hecho exclusiva total o parcial de los bienes al hombre”*. Citando a Valencia Zea, dice la Corte. (...) *Pero existe una gran diferencia entre la propiedad y la posesión. La primera constituye un poder jurídico definitivo; la posesión, un poder de hecho provisional; provisional en el sentido de que puede caer frente a la acción que se deriva de la propiedad. De ahí que la doctrina actual predique (en forma bastante unánime) que la posesión es un derecho real provisional*¹⁶.

Corolario de lo anterior es claro que la prueba de éste tópico debe dirigirse a acreditar la efectiva realización del corpus y el animus por parte de quien se predica poseedor, ello es que el bien ha sido aprehendido materialmente por un sujeto jurídico, con el ánimo de señor y dueño, sin reconocer ningún tipo de dominio ajeno por el tiempo que determina la ley.

Y de acuerdo con nuestro código civil, se tiene que la prescripción adquisitiva de dominio puede tener dos vías, la ordinaria y la extraordinaria, según sea la especie de posesión, podrá escoger el tipo de prescripción a la que se ha hecho referencia, de manera que si se trata de una posesión regular, entonces sería la usucapición ordinaria el camino a seguir para lograr la formalización de la propiedad, y siendo irregular la posesión, debe tomarse el de la prescripción extraordinaria para alcanzar dicho propósito.

Por el lado de la prescripción extraordinaria como modo para conseguir el dominio de las cosas, basta el ejercicio ininterrumpido, pacífico y público de una especie de posesión que no necesita proceder de un justo título ni de la buena fe, pues sólo basta la simple tenencia

¹⁶ Sentencia T-494 de 12 de agosto de 1992, Corte Constitucional.

material del bien durante el periodo de tiempo determinado por la ley para consumarla y lograr el propósito de la formalización del derecho. Según el Artículo 2531 del Código Civil, éste tipo de prescripción no requiere de título alguno, y en ella, la buena fe se presume de derecho, a menos que exista título de mera tenencia, cuya existencia permitiría desvirtuarla en un principio e impediría la procedencia de ese tipo de usucapición; sin embargo, existen dos circunstancias que darían aplicabilidad a la prescripción extraordinaria a pesar de avizorarse la existencia de un título de tenencia, las cuales quedan reducidas a la ausencia de reconocimiento del derecho del legítimo propietario durante un periodo de diez años por parte de quien pide la prescripción, y que éste hubiere poseído la cosa sin clandestinidad, violencia e interrupción durante ese mismo periodo de tiempo, de manera que cumplidos estos supuestos de hecho, sale avante la usucapición no obstante la acreditación de aquella mala fe.

Como se ve, en la usucapición extraordinaria del dominio debe acreditarse que la cosa hubiere sido sometida a la especie de posesión irregular, porque es esta la que carece y no deviene del justo título ni de la buena fe, o de ninguna de las dos, tal como lo preceptúa el Artículo 770 de Código Civil. Por ello se afirma con facilidad que la propiedad pretendida por este modo necesita únicamente de la posesión irregular ejercida de manera ininterrumpida, pacífica y pública durante los últimos diez años, según lo prevee el Artículo 2532 *ibídem*, modificado por el Artículo 6 de la Ley 791 de 2002.

En todo caso, esta forma de usucapir se encuentra reglada por normas jurídicas diferentes e independientes en lo atinente al tiempo necesario para configurarla y que pueden ser escogidas a voluntad del prescribiente con la conjunta exclusión de la otra, pero escogida una cualquiera de ellas, dicho término se contara de conformidad con sus previsiones desde la fecha en que inicia su vigencia, según regla contenida en el Artículo 41 de la Ley 153 de 1887. Siendo el término de 10 años el exigido por la Ley 791 de 2002 para configurar la institución descrita, entonces debe computarse desde la fecha de su vigencia en consonancia con lo anteriormente expuesto, la cual data del 27 de diciembre de 2002, o de 20 años si se eligiere la normativa que regulaba su duración antes de la reforma traída por causa de la legislación descrita.

C.- LA PROPIEDAD COMO FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA

Es natural que dentro de un estado social de derecho en donde tiene prevalencia el interés general del conglomerado social sobre el particular e individual, no sean concebidos los derechos subjetivos o personales desde una percepción absoluta, sino a partir de una óptica relativa, sin importar el rango que estos tengan, es decir, sean fundamentales o no. Una concepción suave y flexible de los derechos individuales viabiliza la realización de los fines sociales, puesto que dicha relatividad permite que sea la supremacía del interés general la que surja como la solución ante un eventual conflicto entre estas dos categorías.

Evidentemente, tal primacía del interés social que supedita los derechos reconocidos, es de obligada realización por ser un elemento que fundamenta al Estado colombiano según se encuentra definida en el Artículo 1 de la Constitución Política de 1991 cuando sostiene que *“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”* (Subrayado por fuera del texto).

Y dentro de ese escenario de supremacía de los intereses generales es permitido revestir a los derechos personales de una función social para el desarrollo de los intereses públicos,

que los legitima en su ejercicio al interior de la sociedad, tal como sucede en el caso de la libertad económica concretada en empresa, pues ésta no existe sino como función social para el desarrollo económico. A causa de aquel contenido de utilidad pública que colma a los derechos, el estado se encuentra facultado para imponer medidas limitativas, restrictivas e incluso extintivas sobre los mismos, en aras dar cabida al adherido propósito de la realización de los fines sociales y de esa manera, solventar las necesidades del conglomerado.

La propiedad, que es derecho de desarrollo constitucional según las previsiones jurídicas del Artículo 58 de nuestra Carta Magna, no escapa de este escenario de la relatividad, y siendo de esa naturaleza no puede ejercerse de manera arbitraria ni absoluta, sino de forma razonable, en concordancia con las necesidades de la colectividad, siendo esa armonía exigida por la función social que cumple como prerrogativa particular, de ahí que al ejercicio del dominio comporte un contenido de utilidad pública. Es más, de acuerdo con el citado artículo, el derecho de propiedad no existe sino como función pública, como instrumento de soluciones de las preocupaciones del estado, en la medida en que literalmente lo define como función social al sostener que: "...la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica...".

Y en desarrollo de la función social, la propiedad puede soportar cargas y condicionamientos que pueden limitar el ejercicio de sus atributos de uso, goce y disposición del bien sobre el cual recae, e incluso en determinadas ocasiones pues ser extinguida, como sucede en el caso de la expropiación cuando resulta necesaria para la satisfacción de las necesidades públicas.

Constitucionalmente se ha aceptado que la protección, preservación y conservación del medio ambiente, así como la utilización racional de los recursos naturales se constituyen en finalidades sociales que obliga al Estado (Art. 8, 58, 67, 79, 80 etc, de la C.N.) al mantenimiento de ambiente sano y a la disposición permanente de los recursos de la naturaleza, y que además imponen restricciones razonables en el ejercicio pleno de la propiedad que se tiene en los bienes que afectan el ambiente, por lo que a la función social que comporta el dominio de la cosas, se adiciona su obligación ecológica, de modo que se pueda hablar en la actualidad de la ecologización de la propiedad, según el Citado Artículo 58 de la Constitución Nacional. De manera que en desarrollo de la función ecológica, es atribuible a la propiedad un conjunto de medidas restrictivas que impiden el ejercicio pleno de sus atribuciones para salvaguardar el imperativo constitucional de la preservación y conservación del medio ambiente.

Así por ejemplo, la declaración de reservas naturales sobre áreas privadas de particulares que comprometan recursos naturales, es una exteriorización de la facultad restrictiva que posee el estado sobre la propiedad individual para excluir dichos bienes de las respectivas concesiones de explotación y aprovechamiento económico de los mismos y de la autorización de uso a particulares, en aras de cumplir con los fines sociales de la función ecológica del derecho de dominio que para el caso expuesto se circunscribe a la facilitación la prestación de un servicio público, adelantamiento de programas de restauración, conservación o preservación de esos recursos naturales y del ambiente, o cuando el Estado resuelva explotarlos, según se desprende del Artículo 47 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

Ahora, la imposición de las limitaciones a la propiedad sobre un predio privado no puede degenerar en una cuestión caprichosa del aparato estatal, por cuanto ellas deben surgir desde la realización de la utilidad pública o social previamente declarada de conformidad con la ley, a fin de satisfacer las necesidades ecológicas de la comunidad, las que para el

Artículo 67 del citado código se refieren al uso colectivo o individual especial de los recursos naturales. Entonces se observa claramente que no puede ser cualquier circunstancia la que tenga suficiente potencialidad para provocar la limitación que se viene enrostrando, sino que las mismas deben encontrar su fuente en el interés social y la utilidad pública declaradas previamente por parte del legislador en uso de su cláusula general de competencia en materia normativa.

Es por lo anterior que la función ecológica de la propiedad se encuentra supeditada a la previsión legal que el congreso de la república efectuare sobre los motivos de utilidad pública e interés social que se requieren para decantar las limitantes razonables y necesarias para la realización de esa función, desde luego, en uso del poder de configuración normativa que la Constitución Política ha depositado en él. En consecuencia ninguna otra autoridad pública puede hacer previsión de las situaciones enunciadas, sencillamente porque carecen de legitimación constitucional en esa causa.

Co base en la sentencia C-474 de 2003 en donde se manifestó que el desarrollo jurídico del derecho de dominio orbita únicamente en la cláusula general de competencia del legislador y en su poder de configuración normativa, sostuvo la Corte Constitucional que dentro de las facultades conferidas al legislador se encuentran aquellas que posibilitan la inserción de medidas restrictivas a la propiedad en aplicación material de la función ecológica que obliga a ese derecho. Así, mediante sentencia C-189 del 2006 manifestó que “en aras de garantizar la realización de la función ecológica inherente al derecho de dominio, el legislador puede extender frente a los terrenos de propiedad privada que se incorporan al Sistema de Parques Nacionales Naturales, la prohibición de realizar actos que impliquen la transferencia de dicho dominio, a fin de controlar el proceso de colonización sobre las mencionadas zonas ambientales de gran riqueza ecológica. Con todo, si bien la limitación prevista en la norma demandada es legítima, ello no excluye la posibilidad del Estado de adquirir los citados inmuebles mediante el procedimiento de compra o a través de la declaratoria de expropiación. Dichas alternativas se encuentran reconocidas, entre otros, en los artículos 14 de la misma Ley 2ª de 1959 y 335 del Código Nacional de Recursos Naturales...”

Pero si bien no puede haber propiedad limitada sin declaración previa del legislador de los intereses sociales que justifican las medidas restrictivas, lo cierto que sobre la misma debe mediar control y vigilancia cuando su ejercicio comprometa la utilización de los recursos naturales. Véase como en materia de aguas, la Administración tiene la facultad de “Ejercer control sobre uso de aguas privadas, cuando sea necesario para evitar el deterioro ambiental o por razones de utilidad pública e interés social...”¹⁷, por ejemplo; y así mismo les asiste como función a las Corporaciones Autónomas Regionales el ejercicio de “las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos...” (Subrayado por fuera del texto).

D.- CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO Y EL DESPLAZAMIENTO EN LA ZONA

Primeramente debemos ubicarnos en el lugar de ocurrencia de los hechos que dieron lugar al desplazamiento y tenemos que se trata del Corregimiento de Agustín Agualongo

¹⁷ Literal d), Artículo 155 del Decreto 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente.

perteneciente al Municipio de Tangua, el cual se sitúa a una distancia de 22 Km de la capital del Departamento de Nariño. Tangua se encuentra conformado por 35 veredas que constituyen 11 corregimientos, poblados en su gran mayoría por personas que se dedican a la extracción de madera, a la actividad agrícola y ganadera, siendo sus principales cultivos la papa, las hortalizas y la cría de ganado y especies menores como pollos y cuyes, actividades de las cuales las familias derivan su sustento.

Para efecto de recordar lo que termina ocurriendo en el año 2002, como desplazamiento masivo producto de los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla en la zona, es del caso manifestar que la presencia por parte de grupos armados ilegales en el departamento de Nariño aparece hacia la mitad de los años 80, a través del M-19, los frentes 29 y 2 de las FARC y el grupo Comuneros del Sur del ELN, pero su presencia obedece más a una cuestión estratégica, pues se busca por parte de ellos una zona de retaguardia, descanso y abastecimiento, por lo cual el nivel de confrontación es demasiado bajo, no obstante y con el paso del tiempo dichas dinámicas van cambiando, pues aparece la siembra de cultivos ilícitos como la coca y la amapola como consecuencia de las primeras fumigaciones que se dan en el año 2001 en el departamento del Putumayo, abriéndose paso una violenta disputa territorial entre las AUC, las FARC y el ELN, dejando como saldo un gran número de desplazados.¹⁸

Es de anotar que la posición estratégica del Departamento de Nariño, por ser zona limítrofe del Ecuador y tener una salida marítima por el sector del pacífico, hace que se convierta en un gran atractivo para los intereses de los actores armados ilegales ya situados en la zona, pues les facilita su movilización, la comercialización y tráfico de estupefacientes, lo cual trae consigo un conflicto armado sustentado en el control de las rutas del narcotráfico y la tenencia de la tierra, la explotación minera, la construcción de mega proyectos productivos, recursos petroleros, entre otros.

La UAEGRTD al hacer el análisis de lo ocurrido en la zona se apoya en el informe de inteligencia entregado por el Departamento de Policía de Nariño en noviembre de 2011 y la indagación a los pobladores, quienes se encargan de relacionar cronológicamente el accionar de los grupos armados ilegales, de la siguiente manera:

- 1.- La compañía Jacinto Matallana del frente 2 de las FARC delinquiró en el período comprendido entre 1995 y 2006, en la jurisdicción del municipio de Pasto, sobre los sectores de Santa Lucía, Santa Isabel, Santa Teresita, Santa Bárbara, Los Alisales, Río Bobo y el corregimiento del Encano.¹⁹
- 2.- El frente 2 de las FARC: Mariscal Sucre opera en el oriente del Departamento y extiende su acción desde la bota caucana hasta el alto Putumayo, pasando por los Municipios de la meseta del Sibundoy, la zona rural de Pasto y los páramos de la Cocha.
- 3.- En la actualidad, el territorio nariñense se encuentra sectorizado por áreas de control de los grupos ilegales. Las FARC operaban con el bloque Sur con el frente 2 "Mariscal Sucre", el cual ha tenido influencia en el área rural de Pasto y la Cocha, y el frente 48 hace presencia desde la Región del Macizo Colombiano hasta Ipiales, incluyendo el área rural del Municipio de Pasto (El encano, Río Bobo). Desplazándose éste último desde Putumayo.

Con relación al desplazamiento masivo ocurrido con ocasión del conflicto armado en el Corregimiento de Santa Bárbara, se indicó que la dinámica del conflicto armado surge en el

¹⁸ Plan Integral Único Departamento de Nariño-2010

¹⁹Ministerio de Defensa Nacional-Departamento de Nariño. Denar –SUBCO.2.92-Código NAPISNGFED097.

Municipio de Tangua a partir del año 2000 con la llegada de extraños que afirmaban pertenecer a la compañía Jacinto Matallana del frente 2 de las FARC, comandados por alias "Matallana", y al frente 32, dirigidos por Alias "Farin", quienes utilizaban al municipio como corredor estratégico para llegar hasta la Vereda "El Encano" y al Departamento del Putumayo, y durante su permanencia en la zona, dichos grupos realizaban todo acto de naturaleza delictiva, como es el caso de los secuestros de múltiples personas, de las extorsiones, de la expropiación de cultivos y alimentos de los campesinos y la destrucción de vehículos pertenecientes a empresas que prestaban el suministro de bienes y servicios, por ejemplo. Normalmente se atestiguaba el homicidio de personas que luego de ser secuestradas, eran transportadas a la vereda "Las Palmas, del Corregimiento de Agustín Agualongo de ese municipio, además de los incontables casos de desapariciones forzadas y lo varios intentos de secuestros contra los líderes comunales que pretendían figurar en el campo político de la localidad.

Además de los nombrados, existían otros comandantes que también hacían presencia en la zona, tales como Alias "El Negro" y "Álvaro", quienes se vieron acorralados y obligados a retirarse durante el desarrollo de los combates realizados en abril de 2002 por parte del Ejército Nacional y Grupos Armados al Margen de la Ley.

En este contexto, era característica la convocatoria habitual a reuniones para fomentar la sustitución de los cultivos tradicionales por la siembra y procesamiento de amapola, siempre bajo amenaza de sometimiento a trabajos forzados en caso de inasistencia a dichas sesiones.

Fue durante la celebración de la época de semana santa del año 2002, es decir, del 07 al 12 de abril de esa anualidad, cuando dieron lugar a los primeros enfrentamientos intensos entre el Ejército Nacional y la Guerrilla de las Farc. Inicialmente, los combates inician en el Corregimiento de "Cruz de Amarillo" para luego trasladarse hasta la represa del Río Bobo, donde algunos integrantes de aquel grupo guerrillero fueron abatidos. Los pobladores afirmaron que los enfrentamientos se desarrollaron en La Cruz, La Victoria, Río Bobo, Santander, Santa Rosalía, Las Piedras, siendo la Vereda "Las Palmas" su lugar retirada después de esa arremetida. Este triunfo de las fuerzas militares del Estado Colombiano y la aparente derrota del grupo subversivo pusieron a los habitantes de las veredas del Municipio de Tangua en una situación de dilema, puesto que debían identificarse ante los primeros para no ser juzgados como guerrilleros, y eran señalados como informantes del ejército por los segundos.

El día 8 de abril de 2002, el Ejército Nacional de Colombia, a través de un grupo de contraguerrilla denominado "Macheteros del Cauca", empieza a hacer aparición eficiente en el corregimiento de Santander en el Municipio de Tangua, y de la misma forma llegaron a la vereda los Ángeles del corregimiento de Santa Bárbara del Municipio de Pasto, advirtiendo a los campesinos acerca de las expectativas de combate, las cuales tuvieron lugar durante los días 11 y 12 de ese mismo mes y año. Fue en ésta última fecha cuando inicia el verdadero éxodo de la población campesina, debido al temor generado por el aumento en la intensidad del combate, ya que en ésta ocasión, el Ejército Nacional recibió apoyo Helicoportado y la presencia del avión fantasma; varios soldados heridos y algunos comandante muertos del grupo guerrillero, tales como Alias "El Indio" y "El Ñoño", fue el resultado de los enfrentamientos descritos.

La exhibición de banderas blancas durante el proceso del desplazamiento colectivo fue necesaria para evitar ser confundidos como miembros del ejército, o bien, como militantes de las FARC. Mediando colaboración del corregidor, muchas de las familiar fueron

transportadas en vehículos automotores hasta la ciudad de Pasto, otras llegaron a las veredas del corregimiento de Santa Bárbara en las que ya no había presencia de la guerrilla, viéndose temerosas de denunciar ante cualquier autoridad a causa de las represalias y amenazas emanadas de los grupos ilegales que participaron de dichos enfrentamientos.

Así se dio el desplazamiento masivo en las veredas del Municipio de Tangua, que repercutió en los niveles sociales, culturales, económicos y familiares. Las personas que se dirigieron al casco urbano del Municipio de Pasto se ubicaron en casa de sus familiares y amigos, muchas sin declarar la situación de desplazamiento debido a los temores antes anunciados.

De manera preliminar quienes volvieron fueron en su gran mayoría los hijos de los propietarios y poco a poco fueron llegando los demás integrantes de las familias aun cuando con el transcurrir del tiempo, las composiciones de muchos de los núcleos familiares variaron considerablemente pues algunas personas habían fallecido, los que eran solteros regresaron con pareja e hijos para iniciar la reconstrucción del proyecto de vida con apoyo de algunas instituciones como EMPOPASTO y CORPONARIÑO. Este retorno se caracterizó por la ausencia de acompañamiento institucional y por la abundancia de temor por los hechos vivenciados que dieron origen al desplazamiento masivo.

Después del fenómeno, los predios quedaron en un estado de improductividad a causa de malas condiciones en que se encontraban, pues la maleza y la sequía impedían las actividades agrícolas y ganaderas a las que normalmente acudía la población para adquirir el sustento.

Actualmente, el Municipio de Tangua tiene de manera aproximada un total de 10575 habitantes, comprendido en la zona rural y urbana, los cuales se encuentran distribuidas en 11 corregimientos junto con sus correspondientes veredas, y si bien existe una relativa calma, el miedo a una nueva incursión armada en el lugar subsiste, lo cual se ve reflejado en las diferentes declaraciones de los reclamantes, pues en éstas aún se vislumbra el miedo a que hechos como los ocurridos hace más de diez años se vuelvan a repetir.

El uso tradicional del suelo ha variado notablemente en la medida en que se ha pasado de las actividades agrícolas a la implementación de carboneo que causa erosión del bosque y escasez de agua, por lo que hay necesidad de recobrar el valor de las tierras, pero considerando la necesidad de que el Estado invierta mucho más en esa población para aumentar los factores de productividad y la generación de ingresos a las familias.

El servicio de acueducto es deficiente en cuanto que el sistema de disposición de aguas es tan insuficiente como la cobertura de la prestación del servicio, aunándose el hecho de encontrarse las redes de alcantarillado en muy mal estado, lo que además genera contaminación en el medio ambiente. También cuenta que los espacios de recreación son escasos y no se han presentado proyectos orientados a mejorar las instalaciones recreativas, si bien las veredas cuentan con canchas de fútbol que son utilizadas por la población que vive cerca de la zona central de cada vereda.

Es inexistente la prestación del servicio de salud en la vereda "Las Palmas", en la medida en que solamente existen las instalaciones físicas del centro de salud pero sin funcionamiento operativo puesto que aún no se ha constituido legalmente, por lo que sus habitantes se ven obligados a trasladarse hasta el Municipio de Tangua, o bien y forma directa, al Municipio de Pasto para satisfacer sus necesidades en materia de salud.

E.- ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA EN EL SOLICITANTE Y RELACIÓN JURÍDICA DEMOSTRADA CON EL PREDIO

Se tiene que la condición de víctima se encuentra establecida en la normativa que orienta el proceso de la siguiente manera “Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima”²⁰

Aunado a lo anterior se tiene que para efecto del ejercicio de la acción de restitución además de cumplirse la anterior condición, se deba acreditar una relación jurídica con el predio y a la vez que se ubique los hechos victimizantes en el espacio cronológico que se ha dispuesto por la ley “Las personas que fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el artículo 3o de la presente Ley, entre el 1o de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley, pueden solicitar la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzosamente, en los términos establecidos en este capítulo.”²¹

A la vez también se debe determinar si las razones que dieron lugar al desplazamiento son despojo o abandono, se entiende por despojo la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia. Se entiende por abandono forzado de tierras la situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento durante el periodo establecido en el artículo 75.²²

Se tiene el informe del contexto del conflicto armado aportado por parte de la UAEGRTD Territorial Nariño, que da buena cuenta de los hechos acaecidos en el Corregimiento de Santa Bárbara del Municipio de Pasto, Departamento de Nariño, que permitieron el desplazamiento de muchas familias que habitaban la zona al casco urbano de la ciudad de Pasto y a otros corregimientos.²³

²⁰ LEY 1448 Artículo 3

²¹ LEY 1448 Artículo 75

²² LEY 1448 Artículo 74

²³ Informe de Contexto de Conflicto Armado en el Corregimiento de Santa Bárbara. Realizado por los profesionales especializados de la UAEGRTD ALEJANDRA NIETO CARDENAS y FAVIO ANDRÉS VILLOTA OVIEDO.

Así mismo es del caso indicar que también a través de la prueba se pudo ratificar circunstancias adicionales en torno a la situación vivenciada en la zona, como es la relacionada con las diferentes acciones delictivas que durante varios años se desarrollaron por parte del grupo de las Farc en la zona, como era el cobro de extorsiones, reuniones permanentes con el objeto de remplazar cultivos legales a ilegales, utilización de inmuebles como zona de resguardo y exigencias alimentarias para sus cuadrillas, por lo cual sus habitantes debían sacrificar parte de sus animales y víveres con el fin atender dichas reclamaciones, pues el nivel de desprotección al que estaban sometidos era demasiado alto.

Estos primeros elementos darían cuenta de la existencia de un conflicto armado en la zona, en el cual se evidenciaron como víctimas una población en particular, gran parte de las personas pertenecientes a la localidad descrita, y descendiendo esto al evento particular del hoy reclamante, se tienen las declaraciones rendidas por los testigos RAÚL GUERRERO ANCHICANOY, VÍCTOR ANDRÉS LÓPEZ TUPE y JESÚS ERASMO VIVAS, quienes al pertenecer a su misma vecindad presentaron idoneidad para actuar como testigos de la victimización padecida por el solicitante, y mediante las cuales se informó acerca de la situación particular vivida por el mismo durante los días de violencia que desencadenaron su desplazamiento forzado, para luego atribuirle la condición de víctima del conflicto armado.

Asegurada la condición de víctima de la forma en que quedó demostrada anteriormente, debe abrirse paso a la determinación de la posibilidad de ratificación de los derechos que él tiene sobre sus predios, como también de la asignación de las medidas con vocación transformadora, a efecto de que la reparación que pueda obtener le dignifique plenamente en sus derechos como sujeto de especial protección, pues si bien ya retornó a su territorio de manera voluntaria, no por ello pierde la posibilidad de hacerse acreedor a programas de la política pública que ha sido diseñada para quienes sufrieron el fenómeno del desplazamiento, pues como quedo anotado, se evidencia que las personas de las veredas del Corregimiento de Santa Bárbara del Municipio de Pasto, aún les asiste el miedo que hechos de las mismas características ocurridos hace más de diez años se vuelvan a presentar, pues el lugar aislado en que se encuentran y la falta de presencia institucional en el lugar los pone en un riesgo potencial de nueva ocurrencia.

Se encuentra acreditado que el señor JOSÉ MARÍA ESPINOSA PINCHAO, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.201.363 de Pasto, mediante Escritura Pública No. 2402 del 15 de noviembre de 1991 otorgada en la Notaria Tercera del Círculo de Pasto, aclarada a través de Escritura Pública No. 352 del 08 de febrero de 1994 de la misma entidad, adquirió los derechos sucesorales sobre una fracción de terreno correspondiente al predio de mayor extensión que se denomina "San Francisco" y se identifica con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 240-104000 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pasto. Es de anotar que de acuerdo con el contenido de la solicitud de restitución y con el informe técnico predial anexo, el reclamante realmente ejerce actos de posesión sobre una área equivalente a dos hectáreas con cinco mil doscientos cincuenta y un metros cuadrados (2,5251 Ha), y no sobre la correspondiente a tres hectáreas (3 Ha), como figura en las antedichas escrituras públicas, de manera que el reconocimiento que se hiciera del derecho de restitución de tierras recaerá sobre la primera fracción mencionada.

Lo anterior, además de sustentarse en la referida escritura pública, también encuentra fundamento en la lectura suministrada al Certificado de Libertad y Tradición No. 240-104000 de la ORIP de Pasto, toda vez que en la anotación 003, en donde está plasmado el mencionado negocio jurídico, se encuentra registrada la enajenación de los derechos

sucesorales a favor del solicitante, recaídos únicamente sobre la porción territorial que aún no ha sido segregada del área universal de ese predio de mayor extensión, tal como fue advertido.

Conforme a la declaración rendida por el testigo JESÚS ERASMO VIVAS, quien se domicilia en la misma vecindad del reclamante, se logró acreditar que desde la fecha de suscripción del citado instrumentos público, el solicitante viene ejecutando actos materiales de señor y dueño sobre la fracción de terreno que fue objeto del referido negocio jurídico de una forma pública, pacífica e ininterrumpida, puesto que aquellas afirmaciones sostienen que desde ese momento viene destinando el predio para el cultivo y cosecha de papa, así como para el pastoreo de su pequeño ganado, pagando además los servicios públicos de energía eléctrica y agua, y no han sido opuestos o controvertidos los derechos que ejerce sobre ese bien, además del reconocimiento que su vecindario le confiere como dueño del mismo, por manera que su condición de poseedor del inmueble solicitado que data de hace más de 20 años, según el referido testigo, aflora como consecuencia inmediata de tales declaraciones.

Como se ve, no surge ninguna circunstancia que impida la formalización de la propiedad que a favor del solicitante se realizara por el modo de la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio y no por la usucapión ordinaria que fue pedida en el respectivo acápite de pretensiones de la solicitud de restitución de tierras, considerando que se encuentra acreditado el ejercicio de una posesión irregular, efectuada de manera pacífica, pública e ininterrumpida durante el lapso superior a los 20 años tal como fue acreditado de conformidad con los medios probatorios aportados al presente asunto.

Es que la posesión surge a causa de ejercerse sobre la fracción de terreno con el ánimo de señor y dueño sin preceder de un título que fuere considerado como justo por ser de aquellos que por su propia naturaleza, carece de la capacidad de trasladar y perfeccionar el dominio, tal como ocurre en las cesiones de los derechos herenciales, que por demás fue el negocio celebrado por el solicitante según consta en las antedichas escrituras públicas como en el certificado de libertad y tradición descrito, ya que éstas únicamente transfieren el derecho sucesoral a determinada persona en sustitución del heredero legítimo, mas no confiere la propiedad sobre los bienes que integran la masa herencial. Y esa tenencia material con el solo ánimo de propietario se sobresale a causa de las actividades de aprovechamiento propio del predio pretendido que viene ejerciendo el reclamante con desconocimiento de derechos ajenos, y que se circunscribe a la destinación del cultivo de productos agrarios como al pastoreo de pequeño ganado.

La forma pacífica de ejercer ese tipo de posición es extraíble de la ausencia de controversia entablada para desconocer los derechos que el solicitante manifiesta tener sobre la porción terrenal que viene pidiendo en restitución de tierras; y el ejercicio público se debe a ese reconocimiento comunitario que le imputa su condición de dueño sobre dicho inmueble; y la ininterrupción se constata del ejercicio continuo de los derechos durante un tiempo superior a los 20 años hasta la actual fecha, según las declaraciones relacionados en líneas antecesoras.

Reunidos como están los requisitos de la prescripción extraordinaria adquisitiva del dominio, resulta plausible acceder a la pretensión de formalizar la propiedad que el señor JOSÉ MARÍA ESPINOSA PINCHAO ha elevado dentro del marco de la política de restitución de tierras contemplada en la Ley 1448 de 2011.

Y con el ánimo de garantizar el derecho de restitución de quien reclama, habrá la necesidad de segregarse dicha porción de área territorial para otorgarle individualización e identidad propia, habida cuenta de los títulos y registros públicos que indican las circunstancias que rodearon su adquisición por parte del actual solicitante, y que además permiten su separación en condiciones de independencia y autonomía frente al predio de mayor extensión. Por ello, resulta propicio que a la mencionada fracción de terreno sobre la cual se ha reconocido la propiedad a favor del reclamante, se le de apertura un folio de matrícula inmobiliaria, y adicionalmente, se lo registre en las bases de datos que administra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, a fin de suministrarle la proclamada independencia, de modo tal que las entidades competentes para éstos efectos sean conminadas en ese sentido.

Además, es pertinente señalar de este momento que el reconocimiento, formalización y protección de la relación jurídica que se ha sido declarada por la presente célula judicial en cumplimiento del objeto del marco general del cuerpo normativo de la política de justicia transicional de restitución de tierras, recaerá únicamente en cabeza del reclamante JOSÉ MARÍA ESPINOSA PINCHAO y su esposa ROSA ELENA CADENA DE ESPINOSA, por así disponerlo el Parágrafo 4 del Artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, al establecer que “ *el título del bien deberá entregarse a nombre de los dos conyuges o compañeros permanentes, que al momento del desplazamiento, abandono o despojo, cohabitaban, así al momento de la entrega del título no estaban unidos por la Ley*”, y no sobre los miembros restantes de su grupo familiar, pues a favor de éstos, se aplicaran únicamente las políticas públicas a que hubieren lugar en virtud de la vocación transformadora que se fundamenta en la acepción amplia y constitucional del término “restitución”.

Empero, y dada la función ecológica que le asiste al ejercicio del derecho de propiedad que se ha reconocido en ésta providencia con ocasión de la formalización declarada, es de aclarar que el mismo debe soportar la carga de ejercerse con observancia de las normas que abogan por la conservación, protección y preservación del medio ambiente y del uso racional de los recursos naturales renovables, considerando que el predio sobre el cual se ejercerá dicho derecho real, se encuentra ubicado dentro de una área de conservación y protección ambiental y en proximidad y colindancia con el Río Opongoy, presentando así posibilidades de comprometer y afectar los recursos hídricos y demás recursos naturales que hacen parte de la zona. Por lo anterior, a CORPONARIÑO, en su condición de máxima autoridad ambiental de la región, le asiste el imperativo de intervenir en la zona de ubicación del predio reclamado, a fin de implementar todas las medidas que resulten necesarias para establecer el equilibrio que debe mediar entre el aprovechamiento de ese recurso hídrico y los restantes recursos naturales y la protección y conservación del medio ambiente, y como consecuencia de cumplimiento de esa obligación, deberá definir los medios de control y vigilancia que otorguen garantía a la materialización del propósito enrostrado.

Recuérdese que en materia de aguas y de recursos naturales, a la Administración se le ha encomendado la tarea de “*Ejercer control sobre uso de aguas privadas, cuando sea necesario para evitar el deterioro ambiental o por razones de utilidad pública e interés social...*”²⁴; mencionándose además que por mandato legal, a las Corporaciones Autónomas Regionales se le ha asignado el ejercicio de “*las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus*

²⁴ Literal d), Artículo 155 del Decreto 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente.

formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos...” (Subrayado por fuera del texto).

F.- RELACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO

Por exigencia de la connotación de la vocación transformadora que presenta la acción de restitución y formalización de tierras, la que según definición previa es concebida como la oportunidad de superar las condiciones de precariedad y vulnerabilidad que presentan las personas enmarcadas dentro del concepto establecido en el Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, se tornó imperiosa la necesidad de consultar las políticas públicas que han adoptado algunas entidades que conforman la red pública del aparato estatal, para efectos de atender a la población desplazada a causa del conflicto armado, y en ese sentido arribar a ese estado ideal de igualdad material que tanto requiere ese sector rural de la nación.

Inmersos en dicha investigación, se avizoraron algunos tipos de política y acciones que no pueden ser de inmediata materialización en la medida en que se encuentran supeditadas al principio de implementación gradual, y que por tanto requieren de otro tipo de realizaciones accesorias al funcionamiento de la misma como sería el caso de asignaciones presupuestales y de elaboración en infraestructura por ejemplo. Así se tiene que son las entidades territoriales y sus articulaciones institucionales, las que mayormente presentan este tipo de situación, pues su política es de realización prolongada o sucesiva en el tiempo a medida del cumplimiento de las condiciones necesarias para su adopción, lo que es característica propia de las metas y objetivos consignados en los diferentes planes de desarrollo territorial como en los respectivos planes de acción.

Superado lo anterior y en virtud de los diferentes escritos allegados a este despacho en anteriores procesos judiciales que fueron objeto de sentencias antecesoras, se pasa a relacionar las entidades que dieron cuenta de sus programas y actividades que propenden al universo de atención a la población en comento y que básicamente se resumen en las siguientes entidades:

1. GOBERNACION DE NARIÑO
2. SENA REGIONAL NARIÑO
3. FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL
4. SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
5. INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODER
6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
7. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF.
8. MINISTERIO DEL TRABAJO

1. GOBERNACION DE NARIÑO

Mediante escrito del 5 de febrero del presente año, el ente departamental manifiesta que todas las políticas públicas adoptadas para atender a la población desplazada por el conflicto armado, se encuentran plasmadas al interior del programa 4 del plan de desarrollo departamental del periodo comprendido entre el año 2012 y 2015, denominado “Nariño Mejor”.

Efectuada la remisión recomendada, se vislumbra que aquella política se resume en dos subprogramas, denominados respectivamente, “Atención integral, reparación y restitución de tierras a víctimas del conflicto armado” y “Prevención a la violación de los derechos humanos y protección a víctimas del conflicto armado”.

El primero de ellos va encaminado a la coordinación, concurrencia y otorgamiento de subsidios a los municipios que carezcan de capacidad de respuesta para garantizar la existencia, atención, reparación y restablecimiento de las víctimas del conflicto armado, y en esa misma línea se apoyaran: **(a)** los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales en los niveles departamental y municipal para la aplicación de la justicia transicional, además de **(b)** complementar y apoyar la atención humanitaria, psicosocial, rehabilitación, asistencia jurídica, capacitación y difusión de los derechos de las víctimas y promover la conformación del fondo de ayuda humanitaria, también **(c)** se promoverá y apoyará la reparación integral y restablecimiento de las víctimas del conflicto atendiendo los lineamientos de la política pública nacional, dejando de ultimo lo relacionado con **(d)** el apoyo del proceso de restitución de tierras a las víctimas del conflicto con observancia de las directrices de la política pública nacional y de los diferentes fallos de la Corte Constitucional.

De lo anterior se espera lo siguiente como metas:

- La creación, reglamentación y funcionamiento del comité de justicia transicional departamental y los correspondientes a cada municipio, así como de la mesa de participación departamental de víctimas.
- Apoyo de los proyectos de formación y capacitación de las mesas municipales de participación de las víctimas.
- Rediseñar e implementar el sistema de gestión de documentos – SIGED.
- Apoyar la conformación de los centros regionales de atención y reparación integral a víctimas.
- Capacitar, asesorar y apoyar los comités municipales de justicia transicional en la ruta de atención y reparación a las víctimas y en los procesos de generación de ingresos y vivienda en el marco de los derechos a la verdad, justicia y reparación.
- Organizar y poner en funcionamiento la mesa departamental de interlocución y acompañamiento con los cuatro pueblos incluidos en los autos 004 y 174 emitidos por la Corte Constitucional.
- Cofinanciar iniciativas de apoyo a los pueblos indígenas en derechos humanos y derecho internacional humanitario en el marco de las dinámicas departamentales de concertación de los planes de salvaguarda y protección de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el marco de los autos de la Corte.
- Apoyar proyectos en coordinación con otras entidades para ejecutar medidas de satisfacción, construcción y recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento de la dignidad a favor de las víctimas.
- Apoyar proyectos productivos en coordinación con otras entidades para garantizar la sostenibilidad de las víctimas que hayan retornado a sus predios a través del proceso de restitución.
- Apoyar proyectos en los procesos de restitución y legalización de tierras en el marco de los derechos a la verdad, justicia y reparación.
- Gestionar y apoyar proyectos en coordinación con otras entidades para la consecución de subsidios de vivienda en el marco de restitución de tierras.
- Gestionar y formular proyectos que fortalecen la resistencia y el rol de las mujeres víctimas en la implementación de la ley 1448 de 2011, así como de los proyectos que fortalezcan los niveles de ingresos con equidad, especialmente para aquellas madres cabeza de familia.

El segundo subprograma se enfoca en la coordinación con los municipios y la nación en la incorporación y apoyo de medidas oportunas y adecuadas para la prevención de violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, garantizando la protección de la población víctima del conflicto, esperando los siguientes resultados como metas:

- La formulación e implementación de proyectos que atiendan las recomendaciones del CIAT y el SAT.
- La implementación de la ruta de protección de víctimas.
- Capacitación y asesoramiento a los comités municipales de justicia transicional en la formulación y aplicación de planes de contingencia.
- Reformulación y activación de los planes de prevención de las violaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario.
- Apoyo a la implementación de los planes de prevención y protección de las comunidades, grupos diferenciales, especialmente niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas en situación de discapacidad, indígenas y organizaciones territoriales.

Sumado a lo anterior, se tiene que en la matriz de planeación estratégica del plan de acción departamental para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, se establecen los siguientes proyectos sobre regalías,

A.- En materia de atención integral:

- Generación de iniciativas productivas y generación de ingresos de familias desplazadas.

B.- En materia de restitución:

- Adquisición, construcción y mejoramiento de viviendas para disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en la población víctima del conflicto armado, en especial, aquella que se encuentra en extrema vulnerabilidad.

C.- En materia de Promoción y Prevención:

- Apoyar la implementación de la escuela de formación integral “Rio y Estero” de ASOCOETNAR.
- Reformulación y actualización del plan de acción integral contra minas antipersonal de Nariño con prioridad en educación de riesgo.

D.- En materia de asistencia y atención integral:

- Construcción de albergues.
- Asistencia humanitaria.
- Seguridad alimentaria.
- Entrega de semilla y pie de cría a las familias de los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado.
- Proyectos con iniciativas productivas y sostenibles para las familias víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas.

E.- En materia de participación y fortalecimiento organizativo e institucional:

- Formación y capacitación de la mesa departamental y las mesas municipales.
- Desarrollo de acciones de capacitación y de gestión logística y operativa a nivel nacional, departamental y municipal para el cumplimiento de las responsabilidades de las personerías municipales.

2. SENA REGIONAL NARIÑO

A través de escrito allegado a este despacho, el SENA REGIONAL NARIÑO, representado por su directora SARA ANGELA ARTURO GONZALES, manifestó que la política desplegada por esta entidad para la atención a las víctimas del conflicto armado, se circunscribe a brindarles oferta de formación de acuerdo a sus necesidades, la cual se compone por los siguientes elementos:

- a) TALLERES DE ORIENTACION OCUPACIONAL, que tiene como objetivo la extracción de las aptitudes, capacidades y destrezas que le permiten a la víctima concretar sus propósitos hacia la formación, el emprendimiento y empleabilidad, de conformidad con la realidad socioeconómica que aquella presente.
- b) FORMACION PARA EL TRABAJO, el cual desarrolla las competencias para el desempeño laboral o para la conformación de su propia empresa a través de procesos de capacitación diseñados de acuerdo con los niveles de escolaridad que presenten las víctimas.

En virtud de ésta oferta la victima puede acceder a varios tipos de formación, que se enlistan en las siguientes:

- Formación complementaria: en ésta se desarrolla las capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas en la población desplazada, para que de este modo pueda generar ingresos mediante la vinculación laboral o la empleabilidad.
- Formación titulada: se forma la víctima en los niveles operativos (certificado de Aptitud profesional Cap), técnico profesional y tecnólogo.
- Formación de trabajadores calificados: forma a talento humano para ocupaciones que requieren del cumplimiento de un programa de aprendizaje, de haber culminado la educación básica secundaria más otros cursos de capacitación y entrenamiento en el trabajo experiencia de manera que los alumnos recibe un certificado de aptitud profesional CAP de esa institución.
- Formacion de técnicos profesionales: están orientados a generar competencias y desarrollo intelectual, aptitudes, habilidades y destrezas, así como conocimientos necesarios para el desempeño laboral en una actividad o en áreas específicas de los sectores productivos y de servicios.
- Formacion de tecnólogos: orientado a la comprensión teórica para la formación de un pensamiento innovador e inteligente, con capacidad para diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los medios y procesos que han de favorecer la acción del hombre en la solución de problemas demandados por los sectores productivos y de servicios del país. Para este tipo de población se destinara hasta un 20% del total de cupos de cada una de las ofertas educativas de formación titulada.

Cabe decir que el acceso a estos procesos de formación se da a través de unos programas especiales, denominados:

- Jóvenes rurales emprendedores: permite la inclusión social de personas y comunidades vulnerables, mediante la formación y desarrollo de proyectos productivos, a fin de propender por la reducción del empleo rural a través de la creación de nuevos negocios y generación de empleo necesarios para consolidar la economía campesina.

- Atención a población desplazada por la violencia: se imparte orientación ocupacional, formación para el trabajo. Formación en emprendimiento y asesoría en planes de negocios a personas en situación de desplazamiento forzado para el desarrollo de sus conocimientos y habilidades operativas y técnicas.
- c) INTERMEDIACION LABORAL, proceso mediante el cual se facilita el contacto organizado entre la demanda y la oferta, de acuerdo con las necesidades del mercado laboral.
- d) EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO, se encarga de impulsar la actividad productiva, el desarrollo económico local, el fomento de empresas en distintas actividades y el fortalecimiento de las existentes.
- e) SEGUIMIENTO, se monitorea la ejecución de los procesos establecidos dentro de la ruta de atención, y en esa medida realizar acciones de mejora continua.

3. FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL

Mediante informe suscrito por el teniente coronel CARLOS ALBERTO MARTINEZ DE LA OSSA, en su condición de Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Brigada Móvil N° 32, refiere que se están realizando operaciones de combate irregular desde enero de 2012 y dentro del área de operaciones impuestas por el comando de la fuerza de tarea Pegaso, para derrotar militarmente al sistema rival en su estructura armada, logística, económica y áreas de acumulación estratégica, y de esa manera eliminar posibles ataques y actos terroristas dirigidos en contra de la población civil y grupos especialmente protegidos y a la vez evitar desplazamientos forzados que se pudieren producir por esta clase de conductas.

Así mismo mediante operaciones adelantadas tendientes al mantenimiento del orden, se encuentra constante vigilancia y presencia sostenida por parte de los batallones de combate terrestres orgánicos de esta unidad operativa al interior del área que le fue asignada, para evitar que en ella delincan los grupos al margen de la ley.

De otro lado, se realizan operaciones dirigidas a dismantelar las redes de apoyo al terrorismo para evitar que con su accionar realicen una privación progresiva de los medio de subsistencia de la población que pudieren generar situaciones de desplazamiento o desalojo. Además se encuentran brindando condiciones de seguridad por medio de operación de control territorial y al presencia de tropas, con el objeto de afianzar los procesos de retorno de la población desplazada.

4. SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Mediante escrito allegado el 19 de febrero de la presente anualidad por parte de la secretaria de educación y cultura del departamento de Nariño a través de su líder de educación de emergencia SANDRA MILENA REVELO, adujo que las acciones para atender a la población desplazada se compilan en el programa de educación en emergencia, por medio del cual se garantiza el derecho de educación a favor de los niños, niñas adolescentes y jóvenes en edad escolar, víctimas del conflicto armado.

Dicha atención en educación se compone por tres factores:

- ATENCIÓN PREVENTIVA: donde se ofrece la asesoría y acompañamiento en la construcción de planes escolares de gestión de riesgo de acuerdo, con las amenazas emanadas del conflicto armado y fenómenos naturales.
- CRISIS – EMERGENCIA: consiste en la salida inmediata del equipo de educación en emergencias, como en la elaboración de diagnósticos educativos con apoyo de las autoridades educativas y de las administraciones municipales.
- POS – EMERGENCIA: seguimiento a los niños y niñas al sistema educativo formal.

5. INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL “INCODER”

En respuesta al requerimiento realizado por este despacho, el INCODER territorial Nariño a través de su director territorial EDUARDO ENRIQUE CHAMORRO DELGADO, sostuvo que las políticas adoptadas para la atención a la población sujeta a desplazamiento forzado, se desarrolla por medio de tres canales así:

- a) SUBGERENCIA DE TIERRAS RURALES, donde se realizan las acciones de prevención y protección mediante proyectos de:
- Titulación de Baldíos a población desplazada, ubicada en zonas de riesgo o bajo situación de desplazamiento.
 - Ordenamiento productivo, referente al procedimiento RUPTA (Registro Único de Predios y Territorios Abandonados por la Violencia).

De igual forma, dentro del canal mencionado se encuentra inmerso el componente de reparación integral que se realiza a través de los siguientes proyectos:

- Ordenamiento productivo: Equipo de restablecimiento del derecho a la tierra a sujetos de reforma agraria desplazada por la violencia además del procedimiento de adjudicación de predios del Fondo Nacional Agrario, debido al cumplimiento de fallos judiciales
 - Titulación de Baldíos: Es el proceso de titulación de baldíos de la nación en cumplimiento de fallos judiciales.
 - Procesos Agrarios: Procesos de clarificación de la propiedad que permita el aislamiento de predios a restituir, concertación y articulación de acción con la Unidad de Restitución de Tierras.
 - Organización de Archivos Históricos: Acopio, clasificación, organización, digitalización y sistematización de los archivos del Incoder.
- b) SUBGERENCIA DE PROMOCION, que integra el componente de generación de ingresos, el cual consiste en la orientación ocupacional y acceso a activos desde el programa nacional de titulación, saneamiento, ampliación de resguardos indígenas, de clarificación y restructuración de resguardos de origen colonial y de fomento al desarrollo rural apropiado culturalmente en beneficio de pueblos indígenas.
- c) SUBGERENCIA DE GESTION, integrado por el componente de información y orientación que se ejecuta mediante el proyecto de divulgación, asesoría y capacitación agroempresarial rural a nivel nacional.

6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

A través de LUCY EDREY ACEVEDO MENESES en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, allega a este

despacho documento mediante el cual manifiesta los planes de acción tendientes a proteger los derechos de las personas víctimas del desplazamiento forzado, los cuales se concretizan en los siguientes programas especiales:

- PROGRAMA MUSICA PARA LA RECONCILIACION, tiene por objeto brindar formación musical para enriquecer la vida de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que fueron víctimas del conflicto armado, el cual es realizado a través de un módulo integral musical psicosocial de alta calidad, este se desarrolla a nivel nacional en 84 ciudades capitales y cabeceras municipales.
- FAMILIAS EN SU TIERRA FEST, es un programa que se traduce en el acompañamiento y atención a los hogares retornados y reubicados en áreas rurales, y en él se les provee de vivienda, seguridad alimentaria, ingresos, trabajo y organización social enfocados a contribuir con la reparación integral de las víctimas del conflicto interno, y que como propósitos presenta la contribución al arraigo, la estabilización socioeconómica, el goce efectivo de derechos y la reparación integral de la población víctima que ha decidido retornar y reubicarse.

Adicionalmente a lo anterior se tiene todas aquellas políticas que se encuentran inmersas dentro del plan nacional de desarrollo 2010-2014 denominado “Prosperidad para Todos” y que presenta como objetivos la superación de la pobreza y la consolidación de la paz en todo el territorio nacional tras la vigencia plena de los derechos humanos y la protección a las víctimas del conflicto. De igual forma despliega aquellas acciones que le son exigidas por el marco normativo de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, la cual se complementa con la política pública de prevención y estabilización socioeconómica para la población víctima del desplazamiento forzado según lo establecido en la Ley 387 de 1997 y demás normas que la complementan.

- RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION, es un programa que presenta un enfoque sociocultural que parte de las riquezas naturales del país para concluir en un propósito que está orientado a establecer unidades de producción de alimentos por el autoconsumo de las comunidades víctimas, además de promoverse hábitos alimentarios saludables, dentro de una estrategia que contribuye a una disminución del hambre en dichas comunidades. Este programa no se fundamenta en la entrega de subsidios y apoyos económicos, sino en una estrategia de cambio de actitud en la forma de producir y acceder a los alimentos, por lo tanto se materializa a través de cuatro líneas de intervención definidas de la siguiente forma:
 - a) ReSA Rural: Tendiente a mejorar el acceso y el consumo de los alimentos de las familias rurales mediante la producción de alimentos para el auto consumo que incentive el ahorro por la vía del no gasto, como también por la utilización de alimentos y productos locales y el fomento de hábitos alimentarios saludables.
 - b) ReSA Urbano: Consiste en mejorar el acceso y el consumo de los alimentos de las familias urbanas para el cumplimiento de los propósitos mencionados en el acápite anterior.
 - c) ReSA Cuna – Culinaria Nativa: Cuyo fin es el mejoramiento del consumo de los alimentos de las familias rurales y/o urbanas, mediante el fomento de hábitos alimentarios saludables y la utilización y rescate de productos alimenticios locales.
 - d) Nueva Línea de intervención ReSA Comunitaria: busca mejorar el acceso y el consumo de los alimentos de las familias y entidades rurales y urbanas, mediante la producción de alimentos para el autoconsumo comunitario.

Por otro lado la Dirección de Inclusión Productiva y Sostenibilidad y Dirección de Ingreso Social del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, quien sostuvo que en materia de generación de ingresos en población desplazada, se ha desarrollado un programa hacia la inclusión productiva y sostenible desde tres líneas a saber:

- Oportunidades para la empleabilidad
- Formación de capacidades con enfoque diferencial
- Acceso de activos

Por ultimo también está el programa de “Más Familia”, el cual busca contribuir a la reducción de la pobreza y la formación de capital humano por medio de transferencias monetarias que se encuentran condicionadas y orientadas a complementar el ingreso de las familias en extrema pobreza y situación de vulnerabilidad. Dentro de este programa, se incluyen como beneficiarios a las familias que cumplan con las siguientes características:

- Que se encuentren en situación de pobreza o de desplazamiento.
- Las familias indígenas en situación de pobreza de acuerdo con los procedimientos de consulta previa focalización establecidos por el programa.
- Familias afrodescendientes en situación de pobreza extrema.

Dentro de este programa se emplean como estrategias proyectadas, la promoción de la salud de la familia, el mejoramiento de consumo de alimentos, de hábitos nutricionales y el desarrollo integral de los niños y niñas menores de 7 años, la asistencia y permanencia escolar en los niveles de educación transicional, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, la generación de capacidades, competencias, habilidades y destrezas para el trabajo en la población graduada como bachiller.

Para el cumplimiento de los fines destacados anteriormente se crearon los siguientes incentivos.

- Incentivo de salud, por familias con hijos menores de 7 años, se paga mensualmente y diferencial por zonas.
- Incentivo de Educación, se paga por menor en hogares con hijos entre 5 a 18 años que cursen entre transición y grado 11, durante los 10 meses del año escolar.

7. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

A través de su Director Regional Nariño HECTOR FABIO QUIROZ ORDOÑEZ, la entidad citada manifestó que los lineamientos para la implementación de la política de atención integral a la población desplazada por el conflicto armado, se desarrollan por medio de los siguientes enfoques:

- a) ENFOQUE DE DERECHOS: dirigido operacionalmente a la instrucción de los derechos fundamentales para generar condiciones que permitan su ejercicio ante las autoridades públicas.
- b) ENFOQUE DE REDES: en él se despliegan acciones y conexiones de significación, apoyo efectivo, emotivo, legal y de pertenencia social, dirigida a niños, niñas y adolescentes para fortalecer y cualificar el tejido social y los espacios cotidianos en los que se desarrollan y desenvuelven.
- c) ENFOQUE DIFERENCIAL: en este se cubre a las poblaciones que por sus características especiales requieren tratamientos diferenciados positivamente a fin de que alcancen la garantía de igualdad material en el actual contexto social.

- d) ENFOQUE TERRITORIAL: en este enfoque las administraciones territoriales fijan objetivos y metas específicas de acuerdo con las particularidades de la situación de la infancia y la adolescencia sobre sus respectivos territorios.

Ahora, las políticas adoptadas para atender a los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento se reducen al programa denominado “Mis Derechos Primero” que se desarrolla mediante los siguientes subcomponentes:

- SUBCOMPONENTE DE ALIMENTACION: presenta como objetivo la contribución a la garantía del derecho a la alimentación de los niños y niñas adolescentes y mujeres gestantes en periodo de lactancia a fin de fortalecerles el acceso a los alimentos básicos necesarios para disminuir el riesgo y los niveles de desnutrición. Para este propósito se desarrollan las siguientes actividades:
 - Atender las necesidades de alimentos de la población víctima de desplazamiento.
 - Apoyar con alimentos a los niños, niñas y adolescentes y a su núcleo familiar en alto riesgo de desplazamiento, como también a todas aquellas que se encuentren en bloqueos alimentarios.
 - Diagnosticar y valorar las condiciones nutricionales y las necesidades específicas alimentarias de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo con un enfoque diferencial.
 - Contribuir a prevenir deficiencias nutricionales y propender por el mejoramiento del estado nutricional de los niños y niñas de 2 a 6 años de edad, a través de acciones de complementación alimentaria.
 - Fortalecer el sistema de vigilancia, monitoreo alimentario y nutricional a nivel municipal.
 - Vincular a los niños, niñas y adolescentes a programas escolares y de alimentación escolar, con el fin de propender la asistencia y permanencia en la escuela.
 - Promover la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el estado para que participe en la generación y sostenibilidad de proyectos para la erradicación del hambre y la desnutrición de los niños, niñas y adolescentes.
 - Diseñar canastas suplementarias nutricionales teniendo en cuenta las necesidades de los niños, niñas y adolescentes según el ciclo vital, sus prácticas culturales, gustos y preferencias.
 - Desarrollar un programa de vigilancia nutricional a nivel municipal de los niños, niñas y adolescentes, con acciones de coordinación intersectorial.
 - Garantizar el acceso y disponibilidad de alimentos según las necesidades nutricionales y preferencia alimentarias de los niños, niñas y adolescentes.
 - Garantizar que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a las condiciones básicas para preservar la salud.
 - Disponer de una infraestructura adecuada para la preparación y almacenamiento de alimentos para los NN relacionados con nutrición, higiene básica, entre otros.
 - Generar espacios para que las madres amplíen su conocimiento sobre lactancia materna, alimentación complementaria, alimentación balanceada, salud y nutrición.
 - Propender por el acceso de los NNA a programas de suplementación de micronutrientes como el hierro y ácido fólico y a programas de crecimiento y desarrollo.
 - Promover convenios con ONGs nacionales e internacionales con el fin de aunar esfuerzos para la asistencia alimentaria de las personas en situación de desplazamiento.
 - Difusión permanente a la población víctima del desplazamiento acerca de la oferta institucional para facilitar el acceso a los programas alimentarios.

Igualmente, asume la responsabilidad de garantizar la entrega de la ayuda alimentaria de transición a los hogares víctimas del desplazamiento una vez estén inscritas en el RUV y hayan sido remitidas por parte del UARIV, la cual se realizara teniendo en cuenta el enfoque diferencial de la población objeto para priorizarla según su grado de vulnerabilidad.

- SUBCOMPONENTES DE ATENCION HUMANITARIA, EDUCACION Y SALUD: mismo que se desarrolla mediante los siguientes programas.
 - a) Apoyo a Familias en Situación de emergencias: contribuye a la atención humanitaria de emergencia a los grupos más vulnerables de la población en situación de desplazamiento entre ellos, niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes y en periodo de lactancia, mediante el apoyo alimentario y el acampamiento psicosocial.

El apoyo alimentario se ofrece mediante raciones alimentarias de emergencia dirigidas a mujeres gestantes, madres en lactancia, niños y niñas entre 6 meses a 1 año, y niños y niñas de 1 a 5 años y a familias indígenas.
 - b) Operación Prolongada de Socorro y recuperación: se desarrolla en convenio con el DPS, PMA y el ICBF, para contribuir y restablecer los medios de subsistencia de la población en situación de desplazamiento así como de otras poblaciones afectadas por la violencia, lo cual se lleva a cabo por medio de la asistencia alimentaria, incremento de la capacidad para satisfacer las necesidades alimentarias y hacer frente a la crisis. Los alimentos proporcionados a través de éste programa son distribuidos gratuitamente y tiene como fin promover y mejorar la salud, la nutrición de los grupos más vulnerables de la población, hasta tanto, estos lleguen a nivel suficiente de autosostenimiento.
 - c) Programas para la atención a la población en situación de desplazamiento, por ciclo vital específico: Mediante este programa se atiende a los niños menores de 6 años a través de hogares comunitarios de bienestar, hogares comunitarios FAMI y múltiples, desayunos infantiles, recuperación nutricional, apoyo a madres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años.
 - d) Recuperación nutricional ambulatoria – desplazados: Esta esquema tiene como objetivo el logro de la reducción del hambre y la mortalidad infantil en la población menor de 5 años con desnutrición aguda, lo cual se cumple a través de controles de crecimiento, alimentación complementaria y adecuada al estado nutricional, la edad y condición fisiológica del niño u educación nutricional a las familias.
 - e) Hogares Comunitarios de bienestar – desplazados (tradicionales, FAMI, múltiples y agrupados): son espacios de socialización para los niños y niñas de hasta 5 años de edad, que tienen como fin promover su desarrollo integral y propiciar su participación como sujetos de derechos, así como de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o psicoafectiva.
 - f) Desayunos Infantiles con Amor: tiene como objeto mejorar el consumo y aprovechamiento biológico de alimentos a niños entre 6 meses y 5 años pertenecientes a familias de los niveles 1 y 2 del Sisben, mediante el suministro de un complemento alimentario y la realización de acciones formativas, de promoción, prevención y atención en salud en los municipio seleccionados, con la participación

activa de la familia la comunidad y entes territoriales coordinados con organizaciones no gubernamentales y empresas privadas.

- g) Hogares Infantiles: a través de los cuales se propicia el desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños menores de 5 años.
- h) Programa de Prevención para niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años: se desarrolla a través del subprograma de asistencia nutricional al escolar y al adolescente como al correspondiente de generaciones con bienestar.
 - Programas de alimentación escolar: se cumple a través de las modalidades de desayuno y almuerzo con el fin de contribuir con la mora en el desempeño académico de los niños, niñas y adolescentes, además de promover el ingreso y la permanencia en el sistema educativo.
 - Generaciones con Bienestar: tiene como objetivo formar niños, niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos que ejercen sus derechos y participan en el desarrollo humano de sus comunidades, a partir del reconocimiento y el respeto de las diferencias culturales y sociales, el acceso y la apropiación de las diversas manifestaciones que existen en sus territorios, promoviendo el desarrollo de capacidades vocacionales y fortaleciendo los proyectos de vida individuales y grupales.
 - Apoyo al fortalecimiento a las familias de grupos étnicos: a través de esta modalidad se busca apoyar procesos y acciones que favorezcan la autosuficiencia alimentaria, el fortalecimiento de redes familiares y sociales propicias, y la inclusión de una cultura de derechos dentro de las formas de socialización tradicionales de las familias de comunidades indígenas con la cual se garantice el respeto por los derechos de los pueblos indígenas en su condición de sujetos colectivos como también los derechos de los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a ellos.
- SUBCOMPONENTE DE REUNIFICACION FAMILIAR: Por éste se contribuye al derecho de la reunificación familiar a través del desarrollo de acciones de protección a niños, niñas y adolescentes que hayan sido separados de su grupo familiar a causa del desplazamiento, para garantizar su reintegro familiar cuando las condiciones lo permitan. Este subcomponente se encuentra desarrollado por los siguientes programas.
 - Reintegros familiares: Aquí se adelantan las acciones necesarias para lograr el reintegro de los niños a su grupo familiar, por lo tanto consiste en ubicar al niño, niña o adolescente con sus padres, parientes o personas responsables cuando las circunstancias lo permitan y ellas ofrezcan garantía para el restablecimiento de sus derechos, de lo contrario, se optará por un medio familiar cercano a su identidad cultural y territorial.
 - Hogares gestores para niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento forzado con discapacidad – Hogares gestores para niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento forzado huérfanos a causa de la violencia armada: brinda la protección requerida a los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento y discapacidad, o a huérfanos por muerte, secuestro o desaparición forzada de uno o de sus dos padres por causa de la violencia armada.
 - Unidades familiares de acompañamiento UNAFAS: es una estrategia complementaria a la modalidad de Hogar Gestor para Niños en situación de

desplazamiento y discapacidad, cuyo objetivo es el de lograr que las familias de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, se fortalezcan y se apropien a nivel individual, familiar y social para asumir su corresponsabilidad en la atención de las necesidades de sus hijos.

- Estrategia promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para la prevención y victimización por acción de grupos armados al margen de la ley
- marco-unidades integrales de atención psicosocial: es una estrategia que busca fortalecer los factores protectores de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, para prevenir reclutamiento, utilización, y otras forma de victimización por los grupos al margen de la ley.
- SUBCOMPONENTE DE ATENCION PSICOSOCIAL: brinda acompañamiento psicosocial a los niños, niñas y adolescentes y su grupo familiar.

Dentro de este subcomponente se desarrolla el siguiente programa de atención:

- Unidades móviles para la atención a la población víctima del desplazamiento forzado: está encaminada a contribuir a la garantía y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes, madres lactantes, familias indígenas y de afrodescendientes y a los adultos mayores en situación de desplazamiento o en el de víctimas de desastre e inseguridad alimentaria mediante el desarrollo de acciones integrales y diferenciales de acompañamiento orientadas a: i) prestar asistencia alimentaria y acompañamiento nutricional, ii) apoyar los procesos de organización y participación comunitaria, iii) promover acciones que atenúen las consecuencias traumáticas de los eventos vividos y prevenga los riesgos asociados al desplazamiento y iv) promover y gestionar la articulación intersectorial para la atención.

8. MINISTERIO DEL TRABAJO

A través del Asesor del Despacho del Grupo de Equidad Laboral, y mediante escrito allegado el 18 de marzo de la presente anualidad, éste Ministerio, luego de reseñar brevemente la naturaleza de sus funciones en el marco de la Ley 1448 de 2011 y del decreto 4800 del mismo año, manifestó que para atender a la población víctima del conflicto armado, ha diseñado el Programas de Rutas Integrales de Empleo Rural y Urbano para Víctimas del Conflicto Armado, cuyo objeto consiste en el apoyo del autosostenimiento de las víctimas, mediante la formación para el empleo, y autoempleo que resulten adecuados a sus condiciones individuales. Dentro de este programa se realizan las siguientes actividades:

- a) Caracterizar individualmente a las víctimas para establecer sus perfiles ocupaciones, sus falencias, necesidades y potencialidades para el enganche laboral o para entrar a proyectos de autoempleo.
- b) Extraer el perfil productivo de los territorios donde estén asentadas las víctimas.
- c) Adecuar la oferta estatal a nivel local y central, realizando un análisis de los programas existentes en materia de formación para el empleo, proyectos o programas de formación para el trabajo, el enganche laboral o el emprendimiento.

En conclusión, es así como a groso modo quedan resumidas todas aquellas políticas que han venido acogiendo las entidades anteriormente relacionadas respecto de los programas,

proyectos y acciones para atender las calamidades que han surgido en perjuicio de la población víctima del desplazamiento forzado por hechos del conflicto armado, adicionándose como fue advertido inicialmente que muchas de ellas se encuentran aún en proceso de implementación de acuerdo con las condiciones que así lo permitan, por lo que habrá necesidad de que a las víctimas se las incorpore a estas cuando quieran que resulten materializadas, en todo caso con observancia de la priorización de inclusiones de acuerdo con los parámetros del enfoque diferencial.

Y desde luego que la aplicación que de estas políticas se hagan a favor de las víctimas sometidas a desplazamiento se exige el acompañamiento de la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras, de manera que ésta entidad deberá coordinar sus actuaciones con las entidades comprometidas en la red de atención a la población desplazada, para ejercer control y vigilancia sobre la materialización de las medidas transformadoras que aquí se adoptan según lo requiere el buen resultado de los objetivos propuestos en el sistema de justicia transicional de restitución de tierras.

G.- IMPROCEDENCIA DE ALGUNAS PRETENSIONES DE CONTENIDO GENERAL

Como consecuencia de la vocación transformadora de las solicitudes presentadas por cada uno de los reseñados reclamantes, fue solicitado un grupo de pretensiones dirigidas a la adopción y ejecución de acciones públicas residida en órbita competencial de las entidades adscritas a la red de atención a las víctimas del conflicto armado, para beneficiar a la comunidad del Corregimiento de Santa Bárbara en la superación de las condiciones de precariedad que muy posiblemente dieron lugar a la ocurrencia de los hechos que permitieron el desplazamiento forzado en la época anteriormente aludida.

Sin embargo, de entrada cabe sostener que dichas pretensiones no revisten procedencia en el presente caso, puesto que sus contenidos y objetos ya fueron satisfechos mediante declaratoria que hizo este juzgado a través de sentencia emitida el 15 de marzo de 2013, en la que se procedió a dar acogida a cada una de las solicitudes de contenido general que se constituyeron en causa de la adopción de ordenes necesarias para proyectar las diferentes políticas de diversas instituciones públicas a favor de las personas del corregimiento mencionado.

En éste orden de ideas, concluye este juzgado que el objeto y finalidades de algunas de las pretensiones de contenido general de cada una de las solicitudes que integran éste trámite acumulado, se satisfacen con las ordenes emitidas en la sentencia anotada, en la medida en que dicha providencia resulta suficiente para lograr esa transformación social que persiguió la UAEGRTD de Nariño en las actuales demandas, por lo que ahora resulta vano e innecesario volver a proveer sobre ese tópico, máxime cuando se corrobora identidad y similitud entre las pretensiones que fueron resueltas en anterior momento y las que ahora ha elevado esa entidad.

En consecuencia, no se tendrán procedencia las pretensiones de carácter general que se hayan contenidas en los Literales a), d), e), h), e i) del Numeral Séptimo del Acápite de Pretensiones de la actual solicitud de restitución de tierras.

Considerando lo expuesto, el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE TUMACO, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley,

VIII.- RESUELVE

PRIMERO: PROTEGER el derecho fundamental a la restitución de tierras a favor del señor JOSÉ MARÍA ESPINOSA PINCHAO y de su cónyuge ROSA ELENA CADENA DE ESPINOSA, identificados respectivamente con las cédulas de ciudadanía No. 5.201.363 y 36.755.115, ambas de Pasto (N), respecto de la fracción de terreno de que trata la Escritura Pública No. 2402 del 15 de noviembre de 1991 otorgada ante la Notaria Tercera del Circulo de Pasto y que forma parte del predio de mayor extensión que se denomina “San Francisco”, identificado con Matricula Inmobiliaria No. 240-104000 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pasto, ubicado en la vereda Divino Niño, Corregimiento de Santa Bárbara del Municipio de Pasto, Departamento de Nariño.

SEGUNDO: Declarar que el señor JOSÉ MARÍA ESPINOSA PINCHAO y su cónyuge ROSA ELENA CADENA DE ESPINOSA, identificados respectivamente con las cédulas de ciudadanía No. 5.201.363 y 36.755.115, ambas de Pasto (N), han adquirido la propiedad por vía de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio sobre la fracción de terreno equivalente a dos hectáreas con cinco mil doscientos cincuenta y un metros cuadrados (2,5251 Ha), obtenida mediante Escritura Pública No. 2402 del 15 de noviembre de 1991 otorgada ante la Notaria Tercera del Circulo de Pasto, y que hace parte del predio de mayor extensión denominado “San Francisco”, que se identifica con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 240-104000 de la ORIP de Pasto, ubicado en la vereda Divino Niño, Corregimiento de Santa Bárbara del Municipio de Pasto, Departamento de Nariño.

TERCERO: SE ORDENA a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pasto, el registro de la presente sentencia que reconoce el derecho fundamental a la restitución de tierras y que los declara dueños por efecto de la usucapión extraordinaria al señor JOSÉ MARÍA ESPINOSA PINCHAO y a su cónyuge ROSA ELENA CADENA DE ESPINOSA, identificados respectivamente con las cédulas de ciudadanía No. 5.201.363 y 36.755.115, ambas de Pasto (N), en el Folio de Matricula Inmobiliaria No. 240-104000 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pasto, que identifica al predio de mayor extensión denominado “San Francisco”. Para efecto del cumplimiento de lo anterior, el señor Registrador de Instrumentos Públicos lo hará aplicando gratuidad ha dicho procedimiento, tal como lo señala el parágrafo 1 del artículo 84 de la Ley 1448 de 2011.

CUARTO: se le ORDENA a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pasto que segregue del predio de mayor extensión denominado “San Francisco” e identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 240-104000 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pasto, la fracción de terreno equivalente a dos hectáreas con cinco mil doscientos cincuenta y un metros cuadrados (2,5251 Ha) que en su momento fue adquirida por el señor JOSÉ MARÍA ESPINOSA PINCHAO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 5.201.363 expedida en Pasto (N), mediante Escritura Pública No. 2402 del 15 de noviembre de 1991 otorgada en la Notaria Tercera del Circulo de Pasto y aclarada a través de Escritura Pública 352 del 08 de febrero de 1994 de la misma entidad.

Por lo tanto, SE ORDENA a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de ésta ciudad que dentro del mes siguiente a la notificación de ésta providencia, registre de manera independiente y autónoma dicha porción de tierra que adquirió el anterior solicitante mediante Escritura Pública No. 2402 del 15 de noviembre de 1991 otorgada en la Notaria Tercera del Circulo de Pasto y aclarada a través de Escritura Pública 352 del 08 de febrero de 1994 de la misma entidad, inscrita en la anotación 003 del Certificado de Libertad y Tradición No. 240-104000 de la ORIP de Pasto, y en consecuencia, le abra o aperture un

certificado de libertad y tradición propio, con su respectivo folio de matrícula inmobiliaria que incluya la titularidad única y exclusiva de dominio a favor del señor JOSÉ MARÍA ESPINOSA PINCHAO y su cónyuge ROSA ELENA CADENA DE ESPINOSA, identificados respectivamente con las cédulas de ciudadanía No. 5.201.363 y 36.755.115, ambas de Pasto (N). Una vez que se haya cumplido lo anterior, se ORDENA al ORIP de Pasto que inmediatamente remita el nuevo certificado de libertad y tradición con destino al Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC para que éste, en término no superior a un mes contado a partir de la anterior remisión, registre la mencionada fracción de terreno en la base de datos que administra, y en consecuencia, le genere una cédula y código catastral propia e independiente del predio matriz, expidiendo el respectivo certificado, en donde se incluya al señor JOSÉ MARÍA ESPINOSA PINCHAO y su cónyuge ROSA ELENA CADENA DE ESPINOSA, identificados respectivamente con las cédulas de ciudadanía No. 5.201.363 y 36.755.115, ambas de Pasto (N), como únicos titulares del inmueble.

Adicionalmente se ORDENA a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pasto, como al Instituto Geográfico Agustín Codazzi que dentro de los dos (02) días siguientes al vencimiento del término otorgados para creación de los nuevos certificados, alleguen informe escrito sobre el cumplimiento de las ordenes contenidas en el presente numeral.

QUINTO: SE ORDENA al Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC como autoridad catastral para el Departamento de Nariño que, de acuerdo con sus competencias y con valoración del informe técnico predial elaborado y aportado al interior del actual asunto por la UAEGRTD de Nariño, realice la actualización de sus registros cartográficos y alfanuméricos del predio referido en el cuerpo de éste proveído. Para efectos de lo anterior, la UAEGRTD remitirá copia de los referidos documentos para que el IGAC pueda adelantar ese procedimiento, y éste tendrá un término no superior a un mes contado a partir de dicha remisión, del registro de la presente sentencia en la ORIP de Pasto y de la recepción de las constancias de calificación del respectivo folio de matrícula inmobiliaria, para el cumplimiento de ésta orden.

SEXTO: Se ORDENA a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pasto que dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de ésta providencia, levante las medidas cautelares que se decretaron y practicaron al interior de la fase administrativa y judicial del actual proceso de restitución de tierras sobre el predio de mayor extensión relacionado en el numeral primero de la parte resolutive de la presente providencia.

SÉPTIMO: Se ORDENA como medida de protección especial, la restricción que establece el Artículo 101 de la Ley 1448 de 2011, que consiste en la prohibición para enajenar o negociar durante el término de dos años la fracción de terreno descrita en el numeral cuarto de la presente providencia. Oficiese para el efecto a la oficina de registro de Instrumentos Públicos de Pasto.

OCTAVO: Se ORDENA a CORPONARIÑO que acuda e intervenga en la fracción de terreno equivalente a dos hectáreas con cinco mil doscientos cincuenta y un metros cuadrados (2,5251 Ha), obtenida mediante Escritura Publica No. 2402 del 15 de noviembre de 1991 otorgada ante la Notaria Tercera del Circulo de Pasto, y que hace parte del predio de mayor extensión denominado “San Francisco”, que se identifica con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 240-104000 de la ORIP de Pasto, ubicada en la vereda Divino Niño, Corregimiento de Santa Bárbara del Municipio de Pasto, Departamento de Nariño, a fin de implementar y materializar en dicho inmueble las medidas que resulten necesarias para prevenir el deterioro, afectación y el uso irracional del recurso hídrico que emana del Rio Opongoy y demás recursos naturales que presentare la extensión territorial antes descrita,

o evitar aquellas circunstancias de deterioro ambiental si estuvieren materializándose en la actualidad con ocasión del ejercicio irresponsable del derecho a la propiedad que en ésta decisión se ha reconocido a favor del señor JOSÉ MARÍA ESPINOSA PINCHAO y su cónyuge ROSA ELENA CADENA DE ESPINOSA, identificados respectivamente con las cédulas de ciudadanía No. 5.201.363 y 36.755.115, ambas de Pasto (N), y así mismo, deberá definir los medios control y la vigilancia que otorguen garantía a la materialización del anterior propósito. Adicionalmente, estudiara la posibilidad de implementar y realizar, en caso de ser viables, las acciones de reforestación en las zonas de la anterior extensión territorial que resulten apropiadas para tal finalidad, en aras de garantizar la conservación de las aguas de esa localidad y de conformidad con lo solicitado por el reclamante en la diligencia de inspección judicial realizada sobre el predio.

Para el cumplimiento de la anterior orden, se le concederá un término de tres meses.

NOVENO: En aras de dar cumplimiento a lo informado en el literal “p” del artículo 91 de la ley 1448 de 2011, sobre contenido del fallo y en especial teniendo en cuenta la facultad de emitir las ordenes que sean necesarias para garantizar la efectividad de la restitución jurídica y material del bien inmueble y la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas reparadas; y teniendo en cuenta que la Unidad Administrativa Especial ha verificado la existencia de otros requerimientos de la comunidad para garantizar la estabilidad del proceso, se ordena que se dé cumplimiento a lo siguiente:

a) Se ORDENA al BANCO AGRARIO de Colombia la priorización de la entrega de los subsidios de vivienda para su mejoramiento, a las personas víctimas del desplazamiento y quienes han sido incluidas en el Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas, y en especial a quien actúa como solicitante de la presente acción.

b) ORDENAR a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas que dentro del Registro único de Víctimas –RUV- incluya, junto con su respectivo núcleo familiar, a quien funge como actual solicitante dentro del presente asunto, en caso de no encontrarse incluido en dicha base de datos.

c) Se ORDENA al Ministerio del Trabajo y al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA que, en el Corregimiento de Santa Bárbara del Municipio de Pasto y dentro de los seis meses siguientes a la notificación de ésta providencia, diseñen e implementen el programa de empleo y emprendimiento Plan de Empleo Rural y Urbano, estipulado en el Título IV, Capítulo I, Artículo 68 del Decreto 4800, dirigido a favorecer a la población víctima del desplazamiento forzado, y una vez que sea puesto en ejecución se realice la inclusión prioritaria del actual solicitante, para beneficiarlo con las ayudas que se puedan desprender de dicho programa. Vencido el término mencionado, allegarán, con destino a éste despacho, informe sobre las actuaciones realizadas.

d) Se Ordena al Ministerio de la Protección Social que de conformidad con su red de apoyo y dentro de los 3 meses siguientes a la notificación de esta sentencia, brinde atención psicosocial que llegare a necesitar el señor JOSÉ MARÍA ESPINOSA PINCHAO, identificado con cedula de ciudadanía No. 5.201.363 de Pasto (N) y su respectivo núcleo familiar, según las competencias que en ese tópico le ha asignado la Ley 1448 de 2011.

e) Se ORDENA a la Alcaldía Municipal de Pasto, que en coordinación con el Departamento de Nariño, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el SENA, y de acuerdo con las calidades y propiedades del suelo, realice un estudio acerca de la viabilidad en la implementación de proyectos productivos sustentables en el predio que

fueron objeto de la presente solicitud, con el fin de aumentar la diversificación y producción local de alimentos, en el Corregimiento de Santa Bárbara Municipio de Pasto, y de darse aquella viabilidad, procederá a adjudicar en favor del actual reclamante la realización de proyectos productivos de conformidad con el estudio realizado. Para el cumplimiento de lo anterior, las entidades referidas contarán con un término no superior a los seis meses contados a partir de la notificación de éste proveído, vencido el cual, allegará, con destino a éste despacho, informe sobre las actuaciones realizadas.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE



**EDUARDO JACOBO MARTÍNEZ RUEDA
JUEZ**